



## IGLESIA Y ESTADO EN LA ESPAÑA CONTEMPORANEA (1789-1914)

Calzada la Corona las botas del más desenfrenado regalismo tras el concordato de 1753, la hostilidad creciente, aunque en pocas ocasiones explicitada de forma espectacular, de sus servidores hacia amplios sectores del estamento eclesiástico sufriría un giro radical al producirse en Francia la eclosión revolucionaria, cuyos jalones iniciales fueron seguidos con vivo interés por parte del clero, en particular los adeptos a las tendencias jansenistas<sup>1</sup>. El impacto de la crisis sufrida por el país vecino hizo que el proceso experimentara una interrupción por la necesidad de la monarquía de atraerse a su política antirrevolucionaria al estamento sacerdotal, principal creador de la opinión pública de la época. Declarada la guerra a la "Francia regicida", la aportación de la jerarquía y clero al esfuerzo militar desplegado por la Corona fue cuantiosa tanto en el terreno espiritual como en el material. En todo el país, y de manera particular en la periferia cántabro-pirenaica —los puntos más sensibilizados ante la nueva situación bosquejada por la expansión del clima revolucionario—, los prelados no escatimaron ningún medio para evidenciar su incondicional apoyo al Estado en la lucha desencadenada contra los enemigos del "Altar y el Trono", según slogan destinado a una prolongada existencia en la propaganda de las esferas gobernantes durante todo el cuarteamiento del Antiguo Régimen. Al mismo tiempo, la mayor parte de la inmensa publicística aparecida a lo largo de todo el conflicto se nutría de un catolicismo de cruzada, en el que las motivaciones religiosas se mezclaban indiscriminadamente con las políticas y sociales, presentándose la Iglesia

1. E. APOLLIS, *Les jansenistes espagnols*. Burdeos, 1966, 120-1. Pese a la agudeza y penetración de su análisis, el cuadro ofrecido por el autor tanto del fenómeno señalado como, en general, de todo el jansenismo hispánico resulta excesivamente monocolor e inmatizado a causa, sobre todo, por la índole de sus fuentes, todas ellas impresas.

—identificada en estas líneas con la jerarquía y clero— como esforzada defensora del “establishment”<sup>2</sup>.

Cerrado de nuevo el templo de Jano tras la firma del Tratado de Basilea (22-VII-1795), la burocracia estatal persistió en la línea, trazada con anterioridad por la Corona y ciertos círculos ilustrados, de hormar las actividades eclesiásticas dentro de los cauces señalados por la potestad civil. Empresa en la que aquélla contaría con el apoyo de una de las corrientes más dinámicas y combativas existentes en las filas del clero hispánico: la jansenista, cuyo proselitismo —según lo confirma, entre otras pruebas, la propagación en esferas muy encumbradas de la administración y la clerecía de las doctrinas del sínodo de Pistoia, cuya condena por el Papa en la Bula “Auctorem fidei” no obtendría el *placet regium* hasta diciembre de 1800— se hallaba en crecida. Numerosos ejemplos patentizan, una vez concluidas las hostilidades con Francia, el recrudecimiento de la actitud regalista. Tras el destierro del cardenal Lorenzana, último Gran Inquisidor identificado con su misión y responsabilidad, y de los prelados de Sevilla —Antonio Despuig— y de Selencia —Rafael Múzquiz (febrero-marzo 1797)—<sup>3</sup>, el célebre decreto de Urquijo (5-IX-1799) por el que la soberanía pontificia, acéfala por la muerte de Pío VI, era reasumida por los obispos a los que se otorgaba la facultad de conceder dispensas matrimoniales —decreto cuyo texto sería elogiado como “un presente del Cielo” por uno de los escasos prelados que lo aceptaron incondicional y entusiásticamente— señaló el fastigio del postrer regalismo borbónico<sup>4</sup>.

El retorno al poder del Príncipe de la Paz, deseoso ahora de aquistarse al clero, implicó un considerable freno al trepidante ritmo alcan-

2. J. M. CUENCA TORIBIO, *Notas para el estudio de la Iglesia catalana: La actitud de la jerarquía barcelonesa ante la Revolución francesa (1790-1795)*. “Analecta sacra Tarraconensia” (1967), 359 y ss.

3. Al utilizar acriticamente a Muriel, tan hostil por lo general a Codoy, la versión dada por R. HERR sobre este suceso no se ajusta exactamente a la realidad de los hechos, *España y la revolución del siglo XVIII*. Madrid, 1964, 343. Vid. acerca de este punto el libro, por lo demás poco interesante y logrado, de J. SALVÁ, *El Cardenal Despuig*. Palma de Mallorca, 1964, 193-5.

4. L. SIERRA NAVA, *El Episcopado español ante los Decretos de matrimonios del ministro de Urquijo de 1799 a 1813*. Bilbao, 1964, 36 y ss.; A. DE LA HERA *El regalismo borbónico en su proyección indiana*. Madrid, 1963, 28. Id., *La caída del primer ministro Urquijo en 1800*, “Hispania” (1963), 561.

zado por el progreso del regalismo en los días de su predecesor Mariano Luis de Urquijo. Mientras que por su parte, el monarca, una vez comprendido el verdadero significado y trascendencia del decreto de 5-IX-1799, prodigaba sus excusas al nuevo Pontífice al tiempo que proyectaba enviar a todos sus más efusivos aceptantes a pedir personalmente perdón al Papa Chiaramonti, aunque, a causa de la actitud conciliante de éste, el rey español acabaría por abandonar una idea que hubiera perjudicado al prestigio de parte de su episcopado. Como se volatilizaría igualmente el pensamiento acariciado tiempo atrás por Urquijo e, incluso, por el propio Godoy en la primera etapa gobernante, de la extirpación del Santo Oficio, que a partir de entonces acentuaría su carácter de mero instrumento policial al servicio de los intereses temporales de la Corona<sup>5</sup>. Dentro de idéntica línea de reconciliación con el estamento eclesiástico debe situarse la aceptación sin reservas por parte de Godoy de la rotunda negativa de Roma a acceder a unas pretensiones en las que había depositado grandes esperanzas y por las que el gobierno madrileño intentaba sustraer las Ordenes Regulares de la obediencia de sus generales y colocarlas bajo la jurisdicción de los Obispos (a quienes se intentaba dotar también de amplias facultades en materia de dispensas matrimoniales), poseer la colación de toda clase de beneficios e, incluso, limitar las funciones del Nuncio a las estrictamente diplomáticas<sup>6</sup>.

Todos estos acontecimientos parecían propiciar la formación de una nueva atmósfera en las relaciones Iglesia-Estado, muy semejante a la que había imperado durante la guerra de los Pirineos. En efecto, sería en los últimos años del reinado de Carlos IV cuando, ante la irrupción en gran escala del clima revolucionario entre las élites intelectuales, se echarían las bases de la alianza entre "el Sacerdocio y el Imperio", en la que ambos habrían de encastillarse hasta fines del Antiguo Régimen y en la que, como siempre —y ello no comporta ningún juicio de valor, sino una simple constatación—, la Iglesia soportaría las más pesadas y lamentables consecuencias. Sin embargo, la

5. J. M. CUENCA TORIBIO, *La última víctima de la Inquisición*. "Historia y Vida", n. 10, 1968.

6. H. CONSALVI, *Memorias*. Apud L. SIERRA, *El episcopado español...*, 124-5; M. GONZÁLEZ RUIZ, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el siglo XIX*. "Rev. Española de Derecho Canónico", I (1946), 385 y ss.



bancarrota de la monarquía provocaría algunas fisuras parciales en el aparatoso edificio de dicha alianza. Agobiado por la crisis hacendística que corroía todo el organismo estatal amenazando con producir su completo colapso, Godoy, cuyo retrato se hallaba en el púlpito de varias iglesias del país, volvió a impelir la política desamortizadora de su anterior etapa<sup>7</sup>, con las consiguientes críticas de los perjudicados, pese a que sus medidas contaban con la anuencia pontificia. Impulsada con renovado vigor la venta de bienes de obras pías establecida en 1798, las gestiones de la diplomacia godoyesca a fin de conseguir de la Santa Sede su beneplácito para la enajenación de la séptima parte de los bienes eclesiásticos (salvo aquellos entregados como congrua a los párrocos) se vieron coronadas por el éxito en 1806. Poco después, en febrero del siguiente año, un Real decreto sancionaría tal medida, aunque sin grandes resultados para el desmedrado erario. El organismo que acabaría con la acefalía gobernante producida por la vacancia del trono fernandino en aquellas regiones libres de las tropas napoleónicas, la Junta Central, adoptó como uno de sus acuerdos más importantes la supresión de las medidas desamortizadoras godoyescas, convertidas, en realidad, por las circunstancias bélicas en letra muerta. A pesar de ello, este acto era un índice elocuente del protagonismo de primer rango tenido por la Iglesia en la lucha contra los franceses. En posesión de grandes riquezas y dueña de un ascendiente y un prestigio entre las masas con los que los de ninguna otra institución o estamento podía compararse, la aportación de la Iglesia en todos los planos y facetas de la guerra de la Independencia se mostró relevante.

En cuanto a sus relaciones con el gobierno de José Bonaparte, estuvieron inicialmente presididas, pese a la erradicación del Santo Oficio por Napoleón (4-XII-1808), por el tenaz afán del "Intruso" de aquistarse la confianza del sector eclesiástico secular. Tanto dentro de éste como en la Jerarquía se dieron numerosos casos de colaboracionismo, forzado más que de grado en la mayoría de las ocasiones —con la excepción de parte del sector más ilustrado de la clerecía del momento—, como lo indica la frecuente correlación de las posiciones con el giro de los avatares bélicos. No obstante, algunos sacerdotes y prelados se distinguieron por su adhesión entusiasta a la causa afran-

7. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *La sociedad española del siglo XVIII*. Madrid, 1955, 166.



cesada<sup>8</sup>. Para premiarlos y castigar a los huídos de sus sedes, el gobierno josefino, que ya había exonerado de sus derechos al Cardenal de Borbón como arzobispo de Toledo y de Sevilla, vacantes (15-16-VI-1810) las diócesis de Osma, Calahorra y Astorga, designó para cubrir éstas y las de Sevilla, Huesca y Zamora a eclesiásticos y obispos que creía adictos. Algunas de tales designaciones, que rara vez contaron con el apoyo de los respectivos cabildos capitulares y que carecieron en casi todos los casos de efectividad, plantearon el grave problema de la confirmación de los nuevos prelados, que el gobierno afrancesado, restaurando —según una opinión muy generalizada en los ambientes janse-nistas y regalistas— una tradición medieval autóctona, pretendió atribuírsela a otros ya designados, aunque dicho procedimiento fue rechazado<sup>9</sup> casi siempre, por éstos.

Un sincero deseo de entendimiento con la Iglesia, cuya defensa había constituido uno de los motores esenciales en el levantamiento de las masas contra las fuerzas napoleónicas, animaba, con alguna que otra excepción aislada, a las minorías que intentaron sentar en las Cortes de Cádiz las bases del futuro ordenamiento jurídico del país y de la convivencia entre sus habitantes. Hasta entonces, tanto la Junta Suprema como la primera Regencia —presidida por el famoso obispo de Orense, D. Pedro de Quevedo— se habían caracterizado, en sus relaciones con la Iglesia, por el decidido apoyo a sus miembros y bienes, objeto éstos últimos de algunas críticas adversas por amplios sectores del naciente periodismo político y por numerosas páginas de la vasta publicística alumbrada por la crisis nacional; críticas cuyo común denominador era la continuidad y acrecentamiento del proceso desamortizador —puesto en marcha de manera tímida en el período precedente— y el afán de una mayor entrega a la comunidad de los fieles, particularmente de las órdenes regulares. Tal programa refor-

8. A. MARTÍNEZ ALBIACH trata con cierto desorden analítico y expositivo el importante tema en su: *Religiosidad hispana y sociedad borbónica*. Burgos, 1969, 234 y ss. Un especialista del reinado josefino, M. Artola Gallego no aborda sorprendentemente la cuestión en ninguna de sus obras. Tampoco otro destacado conocedor de la época, H. Juretscheke, aporta datos abundantes sobre el tema, debido, sin duda, a ser tangencial a las metas perseguidas en su obra: *Los afrancesados en la Guerra de la Independencia*. Madrid, 1962.

9. L. SIERRA, *El Episcopado español ante el decreto de Urquijo*. Madrid, 1963, 95 y passim.

mista —revolucionario a los ojos de extensos círculos— fue, en líneas generales, el perseguido por los constituyentes gaditanos —de los que cerca de un centenar pertenecían al estamento clerical—. La anulación de los señoríos, en su doble versión eclesiástica y civil, la anulación del voto de Santiago, la administración por parte del Estado de los bienes de las comunidades religiosas suprimidas por el régimen afrancesado y, una vez aprobada ya la Constitución, la supresión del Santo Oficio, parecieron, entre otros actos de menor rango, consagrar las aspiraciones más anheladas de los sectores innovadores y de parte de los reformistas en punto a materia eclesiástica. Sin embargo, merced sobre todo a la intervención del futuro Cardenal Inguanzo, el artículo 12 de la Constitución doceañista contenía la declaración más explícita y terminante de confesionalidad que registra ningún texto constitucional de la historia occidental. A pesar de ello, y no obstante los numerosos acuerdos adoptados por las Cortes gaditanas favorables a la religión católica, su obra fue objeto de múltiples resistencias por extensos núcleos eclesiásticos.

La dimisión del Obispo de Orense a raíz de la declaración de las Cortes de residir en ellas la soberanía nacional, que consideraba atentatoria a las tradiciones y leyes patrias, abrió un camino por el que se adentraría, tiempo adelante, un gran número de prelados y sacerdotes. Con la extinción de la Inquisición por los legisladores gaditanos el antagonismo entre el estamento eclesiástico y el sistema constitucional alcanzó su máxima cota. Mientras que, pese a los esfuerzos conciliatorios realizados por el presidente de la segunda Regencia, el Cardenal de Borbón, el Nuncio Gravina se ausentaba del territorio español y se establecía en la ciudad portuguesa de Tavira, los párrocos de diversas localidades, instados por sus prelados, se negaban a aceptar el decreto de supresión del Tribunal<sup>10</sup>. Incluso en la misma Cádiz, varios miembros del cabildo catedralicio se opusieron a su lectura en los templos, por lo que serían desterrados de la ciudad<sup>11</sup>. Los memorandums

10. Entre todas las regiones que reconocían la soberanía fernandina, Galicia fue la más decidida en esta actitud. Cfr. E. LÓPEZ-AYDILLO, *El obispo de Orense en la Regencia del año 1810*. Madrid, 1918, *passim*, pero especialmente 280-2.

11. R. SOLÍS, *El Cádiz de las Cortes*. Madrid, 1958, 330, aunque considera poco significativo este hecho respecto a la mentalidad predominante en la ciudad, adversa en general a la Inquisición.



y reclamaciones de algunos prelados a las Cortes, importantes, si no por su número sí por su trascendencia y significado, desde 1810, aumentaron a partir de entonces <sup>12</sup>.

La liberación, en el verano de 1812, de extensos territorios sometidos a la soberanía josefina alteró sensiblemente el equilibrio de fuerzas entre los sectores que se disputaban el poder en la España fernandina a favor de los que propugnaban la anulación de la obra gaditana y la vuelta al antiguo estado de cosas. Inmersas las regiones que reconocían a la Regencia gaditana en una dialéctica belicista, los intentos por parte de aquélla y de las Cortes para cubrir las vacantes episcopales mediante la confirmación de los nuevos Obispos por los Metropolitanos hasta tanto durase el aprisionamiento de Pío VII en Francia, así como el vasto plan desamortizador que propugnaba el ministro de la Gobernación Álvarez Guerra, guiado del propósito de ensanchar la reducida plataforma social del sistema liberal, identificando con su mantenimiento los intereses de los acreedores del Estado y de la burguesía, no podían por menos de ahondar la fosa que distanciaba al régimen de las esferas que se consideraban preteridas por sus medidas. Empero, la oposición de la mayor parte del estamento eclesiástico hacia aquél no debe considerarse —como apresurada y tendenciosamente se ha afirmado por un ensayismo más atento a reforzar posiciones del presente que a analizar sin prejuicios al pasado— a la luz de una motivación fundamentada con exclusividad en intereses económicos. La resistencia clerical a la mentalidad innovadora se hallaba ya cuajada y consolidada antes de que las Cortes tomaran sus primeras medidas en dicho terreno; de ahí, que éstas fueran más efecto que causa de la postura clerical. Su oposición al gobierno constitucional fue primordial y básicamente ideológica, si bien con el transcurso del tiempo esta actitud se reforzó y dobló con razones de clase <sup>13</sup>.

Un testimonio revelador, entre otros muchos, del predominio alcanzado durante la última etapa de la guerra por los enemigos del sistema se halla en el ostensible descenso experimentado por la prensa

12. M. ARTOLA, *Los orígenes de la España contemporánea*. Madrid, I, 1959, 448-53.

13. J. M. CUENCA TORIBIO, *D. Pedro de Inganzo y Rivero (1764-1836), último príncipe del Antiguo Régimen*. Pamplona, 1965, 138. Una opinión contraria a la mantenida en esta obra es la de M. ARTOLA GALLEGU, *Estudio preliminar a las Memorias del tiempo de Fernando VII*. Madrid, B. A. E., 1957, II, XLVIII.



afecta a éste y el espectacular aumento de la adversa. En un país en que las masas eran por completo analfabetas y la mayor parte de las élites intelectuales militaban en las filas del nuevo régimen, tal hecho sólo cabe atribuirlo a la introducción de la Iglesia a la arena política, subvencionando con sus recursos y con los de la nobleza un poderoso aparato propagandístico. Fiel a la táctica, que dicho fenómeno suponía, de desarticular desde dentro el sistema gaditano mediante la utilización de los grandes recursos proporcionados por éste —como auténtico régimen democrático que fue— a sus eventuales adversarios, gran número de eclesiásticos antiliberales fueron elegidos en las elecciones que se celebraron, durante la primavera y el verano de 1813, para las Cortes ordinarias, sucesoras de las extraordinarias gaditanas.

Encaramados así a los resortes gobernantes y con una opinión popular en su inmensa mayoría simpatizante con su ideario, los sectores eclesiásticos adversos al liberalismo se lanzaron, en los primeros meses de 1814, a una ofensiva en toda regla contra su mantenimiento<sup>14</sup>. Consiguientemente, no es de extrañar que el derrumbamiento de la primera experiencia constitucional fuera en parte no pequeña obra de dichos sectores, que acogieron con indisimulable júbilo la restauración fernandina (mayo 1814). En toda la geografía del país, innumerables "Te Deum", rogativas, novenarios, rosarios, ceremonias expiatorias, procesiones, etc., solemnizaron, con el énfasis y la grandilocuencia propias de un pueblo barroco, el restablecimiento al Trono "de los Recaredos, San Fernando, Felipes"... del "nuevo Constantino...". Así la alianza entre el Trono y el Altar volvería a anudarse con lazos que sus corifeos consideraban indisolubles por la "eternidad". La vinculación del "Altar y el Trono" llegó en aquellos momentos hasta el extremo de unirse el clero a la política represiva impuesta por el Deseado contra los que habían "atentado a su soberanía". Y se dio el caso lastimoso —cuya ejemplaridad afortunadamente no cundió— de que algunos sacerdotes se convirtieran en vulgares delatores. Por otra parte, no debe verse en esta actitud de la Jerarquía y clero españoles una postura nutrida primordialmente de oportunismo o de servilismo

14. J. M. CUENCA TORIBIO, *El fin del primer régimen liberal en Sevilla: alzamiento popular o conspiración nobiliaria?* "Anales de la Universidad Hispalense", XXIV (1964).

hacia la Corona. Poco después, cuando gran número de los Obispos comprendieron que Fernando VII y su régimen estaban muy lejos de semejarse a aquellos modelos bíblicos tan entusiásticamente cantados en la hora de su restauración, no cedieron por ello nada en su ardiente y sentido realismo<sup>15</sup>.

La restauración comenzada por los cuadros sacerdotales a la terminación de la guerra de la Independencia tuvo como horizonte principal de su acción la ruina material del país; lo que determinó que fuera esencialmente de orden administrativo y arquitectónico. En muy escasas regiones su planteamiento respondió a las exigencias de un vacío religioso, que debería rellenarse, o al entibiamiento de un sentimiento, que habría de potenciarse. Por el contrario, la publicística eclesiástica del Sexenio llenó imaginativamente esta realidad —en sí, pese a lo espectacular de las ruinas materiales, poco alarmante o crítica— de peligrosos fermentos de impiedad o descomposición. Dicha versión respondía al enfoque apriorístico y artificial que de la problemática espiritual tuvieron los escritores del primer período autoritario fernandino, casi todos ellos pertenecientes al clero urbano. Tales autores magnificaron el alcance de las medidas anticlericales del régimen doceañista y su extensión en las masas del país. (Realmente —importará acaso insistir por la trascendencia del tema— con la excepción de las comarcas andaluzas los decretos gaditanos en materia eclesiástica fueron letra muerta o golpes efectistas sin consecuencia alguna de verdadera entidad). Una exacta radiografía de la situación religiosa —que hubiera sentado las bases de un programa coordinado a escala nacional— sólo habría sido posible mediante reuniones episcopales en las que se discutieran las conclusiones de los sínodos diocesanos. Ni una ni otra alternativa se llevaron a cabo, por recelo de la Corona o desmaña de la Jerarquía. El concilio nacional, deseado por las Cortes de Cádiz, solicitado por los firmantes del “Manifiesto de los Persas” y demandado con insistencia por ciertos prelados, no se celebró, temeroso el Estado de que pudiera servir de instrumento a las directrices romanas —opuestas por entonces, en gran parte, a las que informaban su política religiosa— o se empleasen en fortalecer y homogeneizar al cuerpo eclesiástico, cuya dispersión y particularismo en cuestiones no

15. *Id.*, *D. Pedro de Inguanzo...*, 168.



dogmáticas habían sido siempre una de sus metas más afanosamente perseguidas. El falso e inadecuado enfoque de la coyuntura espiritual de la nación tuvo efectos más graves que la simple inobjetividad histórica o la postergación de la campaña de concordia y distensionamiento ideológico que la situación del país tan imperiosamente reclamaba. El tono alarmante y casi apocalíptico de la mayoría de los publicistas y oradores eclesiásticos sirvió para que la monarquía impusiera condiciones leoninas a una Iglesia que veía en su protección la última tabla de salvación en un naufragio que muchos de sus miembros creían inexorable en caso de faltarle <sup>16</sup>.

Como es sabido, aunque la difusión de las doctrinas liberales y la participación de muchos eclesiásticos en los asuntos políticos separaron al estamento clerical de gran parte de las élites intelectuales, la práctica religiosa del pueblo español en los primeros años del Sexenio superó quizás a la conocida por las épocas precedentes. Sin embargo, al existir, según se ha señalado, causas que fomentaban el menosprecio y las exigencias de la burocracia estatal hacia la clerecía, la robusta corriente que parece traducir la elevada práctica sacramental de aquellos días no llegó a reflejarse en las relaciones entre la Iglesia y los servidores de la Corona, apegados aún al lenguaje y a los viejos hábitos regalistas, que, aunque en ocasiones pusieron a salvo la independencia de la potestad temporal, causaban o protegían en otras los más injustificados excesos en la espiritual. Como toda la dieciochesca, la administración fernandina quiso siempre reservarse un papel de árbitro en las disputas entre eclesiásticos y fomentó durante el Sexenio los recursos de fuerza y apelaciones de aquéllos al poder civil, acentuando su papel tutelar y de "protección a la Iglesia". Y, así, conforme también con una tradición secular, el estamento clerical se acostumbró a ver en Fernando VII al supremo y omnímodo juez de todas sus aspiraciones y disputas y, en último término, la fuente de todas sus desgracias y venturas. De ahí que en estos años de aparatoso catolicismo oficial la obra de uno de los más irreductibles adversarios del régimen liberal, Rafael

16. *Id.*, *La tercera restauración religiosa del siglo XIX. Contribución a la historia de la Iglesia española contemporánea*. "Anales de la Universidad Hispalense", XXVI (1966); *Id.*, *Arias Teijeiro ante la restauración religiosa (1814)*, "Príncipe de Viana", 100-1 (1965).



Vélez, fuera acusada de antirregalista y atentatoria contra los derechos del monarca, mientras el célebre Félix Amat, jansenista y colaborador —aunque en escasa medida— del rey José, daba a la luz sin impedimento alguno su libro “Observaciones pacíficas sobre la potestad civil” (1817), en el que ponderaba la legítima facultad de los gobiernos a ordenar según su agrado la disciplina eclesiástica <sup>17</sup>.

En consonancia con la elevada temperatura regalista que se registraba en amplios círculos gobernantes y apremiada por la catastrófica situación hacendística, la Corona acordó poner en práctica el vasto plan de reformas proyectado en el breve, pero eficaz, paso de Martín de Garay por aquel ministerio (diciembre 1816-setiembre 1817), y que afectaba en gran parte al clero, ya que, en realidad, implicaba un verdadero punto y aparte en la historia de la hacienda nacional, al quedar por vez primera anulados los privilegios del estamento eclesiástico en materia fiscal y tributaria <sup>18</sup>. Tras imponer al clero (Real decreto de 30-V-1817), previa autorización de Roma, un subsidio destinado a enjugar el déficit del Estado de 30 millones anuales durante seis años —cuyo repartimiento y cobranza quedaba únicamente a cargo de los Cabildos eclesiásticos, con exclusión de cualquier injerencia seglar— una nueva disposición (R. decreto de 5-VIII-1818) disponía aplicar al Crédito público “los productos líquidos de las Encomiendas vacantes y que vacaren de las cuatro Ordenes Militares y el de San Juan de Jerusalén” aparte de una determinada anualidad, al tiempo que se destinaban también al mismo objeto “el producto de dos años inmediatos a la vacante de todas las dignidades, Canonicatos, Prebendas, Beneficios eclesiásticos de cualquier especie de presentación, real o eclesiástica, que se conozca con cualquier título o denominación, así de seculares como de regulares, a excepción de las Dignidades con presidencia en el Cabildo, las prebendas de oficio y las piezas curadas, conforme a la Bula expedida por S. S. el Papa Pío VII en Roma el día 26 de julio último, que acompaña a este Real Decreto”.

Identificadas las causas del Altar y el Trono, del Sacerdocio y el

17. M. MENÉNDEZ Y PELAYO, *Historia de los Heterodoxos españoles*. Madrid, VI, 1965, 135.

18. F. SUÁREZ, *Documentos del reinado de Fernando VII. IV. Martín de Garay y la reforma de la Hacienda (1817)*. Edición preliminar y notas de... Pamplona, 1967, I, 157.

Imperio, con mayor fuerza que en ningún otro momento anterior, el Sexenio presenció la madurez de la confusión de los planos temporal y sobrenatural, cuyas últimas consecuencias se plasmarían en esta fase del reinado fernandino, en particular en la actuación del Santo Oficio. En efecto, durante la última etapa de su existencia, éste concentró su actividad en la extirpación de los brotes oposicionistas al régimen surgidos en los centros masónicos, meros instrumentos, por lo general, del descontento antigubernamental de sus afiliados, de los que únicamente un número muy reducido participaba de las doctrinas espirituales impartidas en las logias. De ahí que la decapitación de la "hidra infernal" fuera (Decreto de 9-III-1820) uno de los primeros actos del restablecido sistema liberal<sup>19</sup>.

Vivo aún el recuerdo de la vasta campaña anticlerical desplegada durante la primera singladura del constitucionalismo, era en cierta medida lógico que el episcopado mostrase ante la restauración de aquél una actitud de recelo y de anhelosa expectación, que, salvo algún caso aislado como el de los Obispos de Zamora y Málaga, no se tradujo en posturas oposicionistas de cierto relieve. Actitud, sin embargo, no secundada por gran número de sacerdotes, que blandieron ante sus fieles, desde el inicio mismo de la restauración liberal, el espectro de la inminente pérdida de la religión católica a causa de la desaparición del Santo Oficio, su valladar inexpugnable. Tales prédicas alcanzaron un amplio eco en la conciencia popular, particularmente en los medios campesinos del Norte y del Este de la Península. Aunque en el estado actual de la investigación es casi prácticamente imposible precisar qué sector eclesiástico abrió el fuego de las hostilidades, la propaganda anti-constitucional de los mencionados grupos fue presentada por varios de sus adalides como simple réplica a la ofensiva desatada contra la mentalidad "retrógrada y servil" de la gran mayoría del clero por los eclesiásticos y prelados —muy escasos, pero relevantes por su personalidad o formación— adictos al Nuevo Régimen a raíz mismo de su implan-

19. J. M. CUENCA TORIBIO, *La Iglesia española durante el Trienio constitucional. Notas para su estudio*. "Hispania sacra", n. 34 (1966). Resulta de especial interés el estudio de las actitudes de la Nunciatura madrileña y de la Secretaría de Estado romana ante la abrogación del Santo Oficio llevado a cabo por L. ALONSO TEJADA, *Ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII*. Madrid, 1969, 38-43. Las posiciones polémicas en que a veces se sitúa el autor así como la falta de rigor de ciertas afirmaciones restan valor a una obra meritoria por varios conceptos.



tación en 1820. Las mutuas acusaciones de responsabilidad en el esionismo nacional resquebrajaron las débiles compuertas que impedían el enfrentamiento abierto entre el sistema constitucional y los cuadros mayoritarios de la Iglesia española. Las medidas adoptadas por el gobierno a partir de mediados de mayo de 1820 contribuirían poderosamente a romper la tregua hasta entonces existente entre él y la Jerarquía. El 20 del citado mes se dictaba un decreto por el que se ordenaba a los obispos escribir pastorales a favor de la Constitución y mandarla explicar a sus párrocos en los días festivos. Excepción hecha del obispo de Orihuela, expulsado del país por negarse a cumplir los términos del decreto, la casi totalidad del episcopado acató dicha disposición, aunque para atenuar su fuerza regalista y mantener a salvo la independencia de la Iglesia —en este período muy celosamente guardada—, ordenó a su clero que ciñese sus explicaciones sólo a los temas eclesiásticos de la Constitución y a los de la justicia y la beneficencia, que se mencionaban en la misma. Privados de sus derechos cívicos los sacerdotes y prelados firmantes del “Manifiesto de los Persas”, con el fin de impedir su elección para la primera legislatura del Trienio, en el corto espacio de su duración gran número de asuntos eclesiásticos se vieron revisados o modificados: abolición de los jesuitas, imposición del servicio militar a los seminaristas, limitación del fuero eclesiástico, especialmente en lo criminal, secularización de beneficios, prohibición de que los Ordinarios pudiesen perseguir la impresión o circulación en sus diócesis de libros y folletos, quedando reducida su autoridad en tal extremo a la promulgación de penas espirituales, renovación del programa desamortizador, etc., etc.<sup>20</sup>.

Dentro aún de un clima de deseable entendimiento con el régimen, la única respuesta del Episcopado a esta actividad legislativa de las Cortes fue abogar por la celebración de un concilio como único medio de acabar con el trastorno de las cosas eclesiásticas, mientras que alguna voz aislada pedía la firma de un nuevo Concordato. Idea que, como en épocas anteriores, no prosperó por el temor del gobierno a las consecuencias políticas que podían derivarse de su convocatoria. Todos los intentos conciliadores de la jerarquía se hundieron cuando las Cortes decretaron la célebre “ley de monacales” (25-X-1820), por cuyos artícu-

20. *Ibidem*.



los se suprimían todos los monasterios y casas de las órdenes monacales, militares y hospitalarias y los conventos de las restantes órdenes que no llegasen al número de 24 religiosos ordenados *in sacris*; se prohibía dar hábitos ni profesiones a ningún novicio y se instaba, por último, al gobierno a que protegiese por todos los medios a su alcance las secularizaciones de los regulares que lo desearan, procurando que se les habilitase para obtener prebendas y beneficios con cura de almas, al tiempo que se les diera cien ducados de congrua.

Al ser conocido el decreto, produjo una honda conmoción en los ambientes eclesiásticos. Mientras que un verdadero alud de literatura panfletista inundaba el país en favor y en contra de sus cláusulas, el arzobispo de Valencia, Arias Teijeiro, enviaba a comienzos de noviembre una extensa y fogosa representación al órgano legislador, en la que sometía a dura crítica todo el articulado de la famosa ley<sup>21</sup>. Sin reparar en la inmunidad eclesiástica ni, sobre todo, en el derecho de representación que asistía a todo obispo, el prelado valenciano fue, sin pérdida de tiempo, extrañado de España. Pese a las protestas provocadas por este hecho en la mayor parte del episcopado y a la acusación de anticanonicidad a la ley de "monacales", la mayor parte de sus miembros era todavía a fines de 1820 partidaria de un entendimiento con la potestad temporal. Guiados de este empeño, se apresuraron a aceptar, casi sin excepción, las facultades concedidas por Pío VII para ejercer la jurisdicción sobre los regulares de sus diócesis a título único y exclusivo, como la Santa Sede deseaba, de delegados apostólicos, paliando así la crisis abierta en la disciplina eclesiástica con la publicación del decreto de "monacales"<sup>22</sup>.

Figura clave en el antagonismo entre la casi totalidad de la Iglesia española y el régimen liberal fue la del batallador nuncio Giustinani, arzobispo de Tiro, que de espectador esperanzado de los sucesos de 1820, se convirtió algún tiempo después en adversario del sistema constitucional, a cuyos dirigentes llegó incluso a amenazar con el exoneramiento por el Papa del acatamiento y fidelidad que sus súbditos le debían. Merced en parte a sus consejos, Roma rehusó conceder la institución canónica a los famosos sacerdotes Diego Muñoz Torrero y José Espiga, designados por Madrid para regentar las diócesis de Guadix y

21. Ibidem.

22. Vid. *Colección eclesiástica española*. Madrid, II, 1823, 108-9.

Sevilla. Su actuación para impedir la preconización de Félix Torres Amat como Obispo de Barcelona fue igualmente decisiva. Tras intentar obstaculizar infructuosamente su nombramiento por el Cabildo de dicha diócesis como Vicario capitular —procedimiento empleado por el gobierno con los obispos preconizados para forzar con ello a Roma a expedir las bulas pertinentes—, consiguió que Pío VII no aceptase la renuncia presentada por D. Pablo Sichar a la mitra de San Paciano<sup>23</sup>. En el camino de un mutuo radicalismo, los gobernantes veinteañistas volvieron a airear el fantasma de la confirmación de los obispos electos por los Metropolitanos sin necesidad de recurrir a la “Corte de Roma”, aunque con idénticos resultados negativos que en la primera experiencia constitucional.

A partir de 1821 se observa en la vertiente religiosa de la política liberal un progresivo extremismo. El año comenzó, en el aspecto eclesiástico, con la expulsión de sus sedes, “manu militari”, de los prelados de León, Oviedo y Tarazona, ex-diputados en las cortes ordinarias de 1813-1814 y firmantes del “Manifiesto de los Persas”. Más tarde otros prelados tomarían también las rutas del exilio de sus sillas, en la mayor parte de las ocasiones hacia tierra extranjera. La general renuencia de los capitulares de estas Iglesias —sólo podría contarse como excepciones las de Oviedo, Burgos, Orihuela y Valencia, y alguna de éstas únicamente parciales— a ocupar el cargo de Gobernadores de la sede vacante, prueba, con cegadora claridad, la cohesión del estamento eclesiástico en su resistencia contra lo que creía intromisiones anticanónicas del poder civil. La resignación con que los obispos expulsados y algunos de los que permanecieron en el país soportaron las arbitrariedades y atropellos —e, incluso, la muerte, como el obispo de Vich, Strauch— de que fueron víctima por algunas autoridades y seguidores liberales, avivó dicha identificación y excitó el celo de su clero y fieles.

Lanzados ya realistas y constitucionales por el plano inclinado que había de conducir a un estado de auténtica guerra civil en numerosas regiones, amplios sectores gobernantes, ante la presencia de algunos

23. J. M. MARCH, *La traducción de la Biblia publicada por Torres Amat es sustancialmente la del P. Petisco. Estudio y publicación de numerosos documentos inéditos importantes para la Historia de España*. Madrid, 1936, 79-87. Acerca del cambio de postura del Nuncio con relación al constitucionalismo vid.: L. ALONSO TEJADA, *Ocaso de la...*, 57-58.



eclesiásticos en los grupos insurreccionados, creyeron encontrarse frente a una conjuración del clero contra las nuevas instituciones. El 3-V-1821, una orden consideraba reos de lesa majestad a los eclesiásticos alzados y exhortaba a los obispos a que condenasen su participación en cualquier género de disturbios. Una nueva disposición de 21 del mismo mes declaraba nula y de ningún efecto toda especie de enajenaciones hechas por las iglesias; y, finalmente, dentro de la misma ofensiva anticlerical, el 29 de junio del citado año, para mejorar la penosa suerte de los campesinos, según expresaban las cortes, se redujo el pago de diezmos y primicias a la mitad, al tiempo que se ponía a disposición del Crédito Público todos los bienes raíces, rústicos y urbanos, censos, foros, rentas y derechos de las Iglesias juntamente con los títulos de adquisición y documentos pertenecientes a los mismos. La réplica del episcopado no se hizo esperar. Según las dolorosas exposiciones de gran parte de sus miembros, el gobierno imitaba con su actitud el ejemplo de Enrique VIII...

Como lógica conclusión del espíritu que había informado hasta entonces su política eclesiástica, el Estado liberal, después de suprimir la autonomía jurídica y económica de la Iglesia, pretendió quitarle la religiosa, con el fin de anularla como foco de oposición, supeditándola por completo al poder civil. En febrero de 1823 se publicó por el comité parlamentario encargado de redactarlo —cuyas deliberaciones ya habían comenzado al iniciarse la primera legislatura— “el arreglo definitivo del clero”. En su texto, como afirmaban sus enemigos, se insertaban muchas de las disposiciones de la Constitución civil del Clero francés, pero en lo esencial, respondía a una tradición autóctona y vigorosa, varias de cuyas aspiraciones se plasmarían en la trayectoria posterior de la Iglesia, especialmente tras el Concilio Vaticano II. Todas las estructuras y cuadros de gobierno de la Iglesia española sufrían una radical transformación con las medidas del proyecto, pensadas en múltiples puntos como un complemento de la legislación civil promulgada por las Cortes, conducente a una mayor racionalización de la administración y organismos estatales. Por su articulado se reducían, en drástica medida, el número de las diócesis; numerosos cuerpos capitulares veían mermados sensiblemente sus efectivos, cuando no, como en algunas colegiatas, suprimidos por entero; la institución canónica de los Obispos se atribuía en exclusiva a los metropolitanos; los diezmos y prestaciones personales quedaban de igual modo caducados; se bosquejaba un ma-



pa eclesiástico del territorio peninsular muy semejante al que surgiría con el Concordato de 1851; se recomendaba a las altas jerarquías un “tenor de vida más evangélico”; se transformaban los planes de estudio de los Seminarios, etc., etc. Pese al radicalismo de algunos de sus extremos —límitrofe a veces con el cisma—, el “arreglo” fue acogido con gran entusiasmo por la mayor parte de los sectores cultos del clero —de filiación jansenista en su casi totalidad— y provocó también viva satisfacción en gran número de sacerdotes urbanos, cuyo estado y dignidad exaltaba el famoso documento. El “arreglo” —transformado ya en enero de 1823 en un proyecto de ley— sin embargo, no prosperó no sólo a causa de la oposición de la jerarquía, sino también por motivo de la situación general del país; ni tan siquiera fue sometido a la discusión en el seno de las Cortes<sup>24</sup>.

Poco antes de la publicación “del arreglo definitivo del Clero”, las relaciones entre la Santa Sede y España, muy tensionadas ya a partir sobre todo de la prohibición por la Congregación del Índice de algunas obras de jansenistas y liberales hispanos y por la negativa del gobierno a entregarle en adelante el producto de las bulas —suma que sería compensada por una renta anual de 9.000 duros—, estallaron al fin con la ruptura diplomática, a la que tendieron conscientemente los dirigentes nacionales, enviando como embajador ante Pío VII al sacerdote que más se había distinguido en los ataques hacia la Santa Sede y la Curia Romana: el cura jansenista D. Joaquín Lorenzo Villanueva (noviembre de 1822). Al no admitirlo Roma como embajador, el Ministerio de Evaristo San Miguel entregó sus pasaportes al Nuncio Gius-tiniani (23 de enero de 1823), que volvería de nuevo a España tras la segunda restauración fernandina<sup>25</sup>.

En conjunto, el influjo e intervención del estamento eclesiástico en los sucesos que señalaron el fin de la segunda singladura constitucional pueden calificarse, sin temor a errar, de decisivos. El poderoso ascendiente ejercido por el clero en la Regencia de Urgel a través de la integración en ella con un papel preponderante del obispo de Menorca y

24. J. M. CUENCA TORIBIO, *D. Pedro de Inguanzo...*, 252-6.

25. J. S. LABOA, *Doctrina canónica del Dr. Villanueva. Su actuación en el conflicto entre la Santa Sede y el Gobierno de España (1820-1823)*. Vitoria, 1957, 239. En su panfletaria obra aunque pródiga en calas penetrantes y acertadas; *El hecho religioso en España*. París, 1968, M. TUÑÓN DE LARA ofrece un personalísimo cuanto inexacto resumen de la actuación de la Iglesia en el Trienio, pp. 78-81.

preconizado arzobispo de Tarragona, D. Jaime Creus, se vio, si cabe, acrecentado con la inclusión en la Regencia formada (26-V-1823) por el duque de Angulema, una vez caído Madrid en poder de sus tropas, de uno de los más denodados adversarios del régimen liberal, por el que había sufrido persecución, el obispo de Osma, D. Juan Cavia. No obstante la breve duración de dicho organismo, sus disposiciones en materia eclesiástica fueron muy abundantes haciendo tabla rasa de la legislación del Trienio y volviendo a restaurar los asuntos religiosos al estado en que se encontraban antes del pronunciamiento de Riego en Las Cabezas de San Juan. Entre otras medidas de igual género quedaron anuladas todas las innovaciones del anterior régimen en la existencia de las órdenes regulares y abolidos sus decretos referentes a la supresión de los diezmos, aunque, a manera de compensación, se imponía al clero, a la espera de la anuencia pontificia, un subsidio anual de diez millones<sup>26</sup>.

A fines de 1823, una vez restaurado Fernando VII en la plenitud de su soberanía absoluta, las relaciones entre la Iglesia y el Estado volvían a encauzarse por los mismos derroteros que diez años atrás. La publicística de aquellos meses, en su casi totalidad de origen eclesiástico, insistió hasta el aturdimiento en la inseparabilidad de la "Monarquía y el Altar", puesta de relieve por los ataques revolucionarios de que habían sido objeto durante el Trienio. Para subrayar más esta identificación entre ambas potestades, un gran número de eclesiásticos se vinculó a la política represiva desplegada en los primeros instantes de la segunda restauración (cuyo exacto conocimiento, por lo demás, está lejos aún de alcanzarse por la historiografía científica). En las comisiones y juntas de depuración instituidas en las diversas regiones, figuraban gran cantidad de eclesiásticos, al tiempo que desde algunos púlpitos se exhortaba a la violencia y se avivaba el recuerdo de los "tres mal llamados años". El rey, para agradecer la adhesión a la Corona mostrada por el estamento clerical en los días de tormenta del Trienio —"bien quisiera mi corazón dar a todo el clero un premio que patentizara mi gratitud"—, confirió grados y condecoraciones a varios de sus miembros, distinguidos por su amor "al Trono y al Altar". Sin embargo, pese a las numerosas peticiones de casi toda la jerarquía y

26. V. DE LA FUENTE, *Historia eclesiástica de España*. Madrid, VI, 1875, 201.



de múltiples instituciones y organismos, en especial de los ayuntamientos, el Monarca se negó, al restablecimiento de la Inquisición, debiendo adoptar una firme actitud ante prelados tan relevantes en la época como el Primado tarraconense, D. Jaime Creus. Con todo, no sería hasta pasado algún tiempo, cuando las "Juntas de Fe", sucedáneos del Tribunal en varias regiones, desapareciesen por completo a partir, sobre todo, de la resonante ejecución de Cayetano Ripoll, ante la que el propio Fernando VII y muchos de sus colaboradores no disimularon su hondo desagrado <sup>27</sup>.

Pese a la tónica prevalente en los primeros años del segundo período autoritario fernandino, sería, sin embargo, injusto dejar de aludir a la conducta de varios de sus ministros que predicaron la concordia y el olvido de los males pasados como el único camino señalado por el Evangelio y requerido por la unidad de la Nación. Algunos de los prelados más prestigiosos se dedicaron a sus afanes apostólicos, luchando contra la corriente innovadora sólo en el plano doctrinal, aunque dicha actitud se encontraba motivada en ciertos de ellos, más que por un deseo de concordia, por un sentimiento de repudio hacia un Poder que creían débil y equivocado en su postura hacia los liberales <sup>28</sup>. Tal posición es la que parece desprenderse de muchas de las contes-

27. J. M. CUENCA TORIBIO, *La última víctima...*

28. Id., *El Cardenal Cienfuegos y el Jubileo de 1826. Contribución a la historia de la Iglesia sevillana*, "Archivo Hispalense", 138 (1966). Sin duda, a causa de su insolitez y rareza en el panorama predominante en una Iglesia como la española ochocentista en casi permanente pie de guerra, merece reproducirse *ad integrum* la exhortación desde Mataró el 25 de julio de 1823 por el Vicario general y Gobernador de la diócesis barcelonesa en ausencia del obispo de Síchar, D. Pedro José Avellá y Navarro, cuyo conocimiento nos ha sido amablemente facilitado por Mosen Bonet y Balta, gran conocedor de la Cataluña decimonónica.

"Ha llegado a nuestras manos un impreso con el título de *Lamentos dels Milicians presoners* con el que imitando los lamentos que la Iglesia permite se canten en los novenarios de almas como dirigidos por las que están detenidas en el Purgatorio para mover la piedad de los fieles a fin de que ofrezcan sufragos y sacrificios que mitiguen el rigor de las penas que están sufriendo, se ponen en boca de los extraviados milicianos expresiones de desesperación, de rabia y de venganza impropias y malsonantes, y por fin se lee una oración dirigida al mismo Lucifer pidiéndole que conceda a todos los llamados Comuneros y Francmasones que vayan a parar en los Infiernos, concebida casi en los mismos términos con que la Iglesia nuestra cariñosa Madre dirige sus votos al Todo-Poderoso pidiéndole el eterno descanso y una corona de gloria para todos los fieles. Creemos que el autor de este impreso no se habrá propuesto un mal fin, y que no ha intentado ridiculizar las prácticas de la Iglesia, pero creemos sin embargo de nuestro deber excitar el celo de los curas Párrocos, de sus Tenientes y



taciones dirigidas en 1825 al gobierno por 24 prelados —de las 60 diócesis existentes en aquellos momentos, sólo 54 estaban cubiertas— en respuesta a un informe en que aquél solicitaba sus juicios ante la situación general del país, sobre todo en su vertiente política. En dicha actitud radica también la principal clave explicativa del evidente distanciamiento entre el Poder y la Iglesia, recubierto no obstante, por la propaganda de la época bajo la fraseología convencional del “Altar y el Trono”<sup>29</sup>. Ante la difusión del moderantismo por las altas esferas dirigentes y la postura equilibrada mantenida por el monarca, parte del episcopado y el clero no dejaron de albergar una indisimulable desconfianza hacia la Corona. Al estado de ánimo explicaría, al me-

el de los demás sacerdotes para que ilustren a los fieles y en particular a la gente sencilla a fin de que conozcan y se persuadan de que la Iglesia no aprueba semejantes escritos. Aunque en nuestros días hayamos tenido la desgracia de ver impresos y repartidos con asombrosa prodigalidad credos políticos, padre-nuestros, salves, oficios de difuntos, letanías y otras deprecaciones religiosas en estilo burlesco llenas de impiedad y de blasfemias, y dirigidas a ridiculizar las ceremonias eclesiásticas, a pervertir el espíritu público y a excitar el odio y el rencor contra los Ministros del Santuario y contra los hombres que por ser amantes de su religión y fieles a su Rey eran tachados con el apodo de serviles, no es justo ni tolerable usar de las mismas armas que con sobrada razón reprobamos en los demás, ni disimular escritos que aunque con buen fin, son no sólo impropios sino indecorosos, sino opuestos al verdadero espíritu de la Iglesia.

Es necesario tener ideas muy equivocadas de nuestra Santa Religión para creer que ésta permita que fomentemos resentimientos, odios y venganzas, y que para atizarlas mañosamente nos valgamos de escritos satíricos en los que se hace una indecente mezcla de cosas sagradas y profanas. No nos es lícito volver mal por mal, sino bien por bien. Los Sacerdotes y los hombres buenos han sido perseguidos es cierto, pero más lo fue nuestro Divino Redentor Jesucristo, y lo primero que nos enseñó desde el árbol de la Cruz fue rogar por sus perseguidores, disculpándoles para con su Eterno Padre diciéndole que les perdonase porque no sabían lo que se hacían, y en vano hubiéramos recibido nosotros el carácter de Ministros suyos si no practicásemos lo que El nos enseñó. Acordémonos de que los que nos han perseguido, los que se separaron del camino de la verdad, hermanos nuestros son, y redimidos a costa de la misma sangre que nosotros, y por lo mismo roguemos al Señor para que por su infinita misericordia rompa el velo con que el maligno espíritu cubre sus ojos, y para que un verdadero arrepentimiento y una ejemplar enmienda repongan la inmensa multitud de males que han cometido y los infinitos escándalos que han causado. Nos prometemos que todos los Eclesiásticos y en particular los Párrocos no perdonarán medio para inculcar a los fieles estas saludables doctrinas, que no son otras que las que enseñó y practicó nuestro Salvador, y que procurarán distraerles de la lectura de cualesquiera papeles, opuestos al espíritu de la Iglesia...”.

29. F. SUÁREZ, *Documentos del reinado de Fernando VII. II. Informe sobre el estado de España (1825)*. Estudio preliminar y notas de ... Pamplona, 1966. Las respuestas de los prelados a partir de la p. 143.

nos en cierta medida, la considerable ayuda material y espiritual prestada por algunos círculos del alto clero catalán a los "Agravados", al levantarse, en 1827, contra Fernando VII en pro de la causa de su hermano D. Carlos<sup>30</sup>. El descontento eclesiástico, subyacente a todas las relaciones entre la potestad temporal y la religiosa a lo largo de los últimos años del reinado fernandino, contribuye a encuadrar en sus parámetros más exactos la pujanza mostrada por el regalismo durante las postrimerías del Antiguo régimen. Muy contrariada por la comprensiva actitud adoptada por la Santa Sede hacia las necesidades religiosas de los países sudamericanos recién emancipados, la Corona retenía varias Bulas y disposiciones pontificias, introducía algunas reformas secularizadoras en la organización y gobierno de las universidades —cuyos planes de estudios después de la reforma de 1824 se atenían a la más estricta ortodoxia religioso-política— y rechazaba con acritud las protestas de Roma por los frecuentes casos de simonía que se daban en España<sup>31</sup>.

La Regencia de la reina Gobernadora y su prolongación, normal y espontánea en tantos aspectos, en el trienio esparterista de 1840-43 es el más extenso de los períodos tipificados en la historia española por su signo anticlerical. La década que presenció el triunfo y la consolidación del sistema liberal se presenta así como el único segmento de la trayectoria de la Iglesia española contemporánea hasta la guerra civil de 1936, comparable —salvadas extensas distancias y guardadas amplias proporciones de magnitud e intensidad ideológica material— al recorrido por la Iglesia francesa durante la convulsión que cerró el siglo XVIII. Aunque otros períodos de la vida nacional encuentran en su anticlericalismo la nota distintiva de su facies histórica, todos debieron enfrentarse con resistencias más enconadas y vigorosas y carecieron de la continuidad de esfuerzos que caracterizó, en el plano a

30. C. SECO SERRANO, prólogo a la obra de J. TORRAS ELÍAS, *La guerra de los agravados*. Barcelona, 1967, XVII-XIX.

31. F. MARTÍ GILABERT, *La primera misión de la Santa Sede a América*, Pamplona, 1967, 335-7; J. M. MARCH, *La exclusiva dada por España contra el cardenal Giustiniani, en el cónclave de 1831, según los Despachos diplomáticos*. Madrid, 1932. Habitualmente bien documentada e informada, la clásica obra de J. BÉCKER, *Relaciones entre España y la Santa Sede durante el siglo XIX*. Madrid, 1908, presenta una gran laguna respecto a esta etapa, en cuyo estudio se llega a veces a incurrir en contradicciones, pp. 72-5.



que se hace referencia en las presentes líneas, a la década de las regencias. Sin embargo, pese a todo lo expuesto, la casi totalidad de las disposiciones decretadas entre 1833-43 prolongan las líneas de fuerza alumbradas en las experiencias constitucionales anteriores. Más que originadas en un plano estrictamente jurídico o formal, las innovaciones fueron, sobre todo, producto del nuevo clima histórico que envolvía a la nación<sup>32</sup>.

Los ejes regalistas que habían hormado desde los inicios de la Edad Moderna las relaciones entre la Corona y la Iglesia no fueron abandonados por el gabinete del creador del Estatuto real. Muy por el contrario, las diferencias entre la monarquía isabelina —no reconocida por la Santa Sede— y ésta, a las que ambas —y de modo especial aquélla— pensaban poner término con el mantenimiento de posturas irreductibles, reforzaron el espíritu y la práctica regalistas de las esferas madrileñas. La toma de posiciones, cada vez más nítida, por extensos sectores eclesiásticos ante la guerra civil que asolaba al país, junto con las exigencias financieras del bando isabelino harán que, por Real orden de 9-III-1834, se suspenda la provisión de prebendas, canonjías y beneficios eclesiásticos, con excepción de los que llevan anejas la cura de almas, las llamadas de oficio y las dignidades con presencia en los Cabildos, a fin de enjugar la deuda pública con la renta de tales vacantes. Poco más tarde se asistirá a la coronación de la política realista del Ministerio de Martínez de la Rosa con la creación, el 22-IV-34, de una Junta Eclesiástica, cuyo objetivo se colocaba en la reforma del clero, y que tenía su precedente más claro en el Comité formado en el Trienio para “el arreglo definitivo del clero”. Promediado 1834, tras la frontera delineada por la matanza de frailes en la capital de la nación ante la pasividad de las autoridades —repetida un año después en otras grandes ciudades como Barcelona— y la aparición del Pretendiente en el teatro bélico vasco-navarro, comienza a dibujarse, con rasgos cada vez más acusados, en la legislación religiosa del gabinete del autor de la *Conjuración de Venecia* un irrefrenable desplazamiento hacia posturas maximalistas, sin que por ello se diese rienda suelta a un anticlericalismo jacobino, ni alentase en ella una aversión a lo eclesiástico en cuanto tal. La erradicación defi-

32. J. M. CUENCA TORIBIO, *La desarticulación de la Iglesia española del Antiguo Régimen*. “Hispania Sacra”, n. 39 (1967).



nitiva del Santo Oficio y del voto de Santiago, las Reales órdenes de 3 y 6 de abril, que anulaban respectivamente la exención de los novicios para el alistamiento en el ejército y el fuero de todos los que lo disfrutasen para declarar en causa de conspiración sin necesidad de permiso de sus superiores, marcan el vértice de esta legislación.

No obstante su breve extensión cronológica, el paso por el poder del conde de Toreno marca un jalón de indudable relevancia en el desarticulamiento de la estructura religiosa del Antiguo Régimen, abriendo los decretos de su gabinete un ciclo de persecución contra los miembros del estamento eclesiástico sin paralelo hasta entonces en la historia española. Mientras que el 4 de julio de 1835 se suprimía la Orden de los Jesuitas, yendo sus bienes a enjugar la deuda estatal, otro decreto del 25 del mismo mes ordenaba la extinción de los monasterios y conventos que no tuviesen 12 religiosos profesos, de los que al menos las dos terceras partes fuesen de coro, excepto las casas de clérigos regulares de las Escuelas Pías y los colegios de misioneros para las provincias asiáticas. El 3 de septiembre del citado año, el gabinete Toreno finalizaría su legislación anticlerical con la determinación de restablecer al estado que tenían a fin del Trienio la venta de los bienes que, habiéndose aplicado al crédito público por la supresión de conventos e institutos religiosos declarada en 25 de octubre de 1820, se enajenaron a nombre del Estado hasta el comienzo de la segunda restauración fernandina, revirtiéndose dichos bienes a sus compradores respectivos.

Al frente del nuevo ministerio que sucedió al de Toreno, Mendizábal se lanzó *incontinenti* a una escalada de la persecución anticlerical con medidas en que encontraban eco las aspiraciones límite de las juntas y comités progresistas. Abrió la marcha un decreto de gran trascendencia por el que se prohibía a los prelados diocesanos, sin ningún pretexto ni motivo, expedir dimisorias y conferir Ordenes mayores, permitiéndose únicamente el acceso al presbiterado o al diaconado a los ya ordenados de diáconos o subdiáconos, y ordenar "in sacris" a los que tuviesen curato o beneficio con cura de almas, o aprobada oposición que les diese derecho a la mencionada colación. Días después, por el decreto de 11-X-1835, quedaban suprimidos "todos los monasterios monacales", así como otros de canónigos regulares y diversas órdenes, exceptuándose eventualmente de la supresión algunos de los más renombrados. Poco después de esta extinción, el gabinete

dio un nuevo decreto cuya aplicación encadenaba la suerte de un elevado número de sacerdotes a la causa isabelina. A partir de la Real orden de 20-XI-1835 pocos eclesiásticos podían recorrer su "cursus honorum" o encontrar medios de subsistencia sin haber probado previamente "su adhesión decidida al legítimo gobierno de S. M.". Tras un corto paréntesis de espera, relleno de disposiciones de escasa relevancia que puntualizaban o concluían procesos abiertos en los ministerios precedentes, Mendizábal dio un paso al frente en su política religiosa al ejecutar el acto tal vez más lleno de resonancias y cargado de trascendencia del ochocientos: la desamortización. Por el articulado del célebre decreto (19-II-1836), quedaban "declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase, que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquiera título que sea y también todos los que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación" permaneciendo al margen de ella "los edificios que el Gobierno destine para el servicio público, o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales".

La desamortización fue seguida de un reforzamiento de las medidas coactivas ejercitadas por el Poder sobre el estamento eclesiástico, cuyo encrespamiento frente a los gobernantes madrileños arreció a partir de entonces. Por una Real orden de 26-II se comunicaba a los gobernadores civiles que "no permitan que en el distrito de su respectivo mando ejerzan las santas funciones de la predicación y confesión aquellos eclesiásticos que por su conducta y opiniones políticas hayan hecho ver que se olvidan de la fidelidad que deben a su soberana legítima, de las obligaciones que los ligan a la sociedad y a la Patria en que nacieron y de los sublimes preceptos que forman la doctrina del Divino Maestro". En plena ofensiva anticlerical se daba el decreto de 8-III que cerraba una larga cadena de medidas contra las Ordenes regulares, cuyos primeros eslabones se habían forjado en los días de Carlos III. Por sus cláusulas se suprimían todos los establecimientos de éstas con la excepción de "los colegios de misioneros para las provincias de Asia de Valladolid, Ocaña y Monteagudo, las casas de clérigos de las Escuelas Pías y los conventos de Hospitalarios de San Juan de Dios".

Nacido en parte como reacción frente a las directrices gobernantes



de Mendizábal, en el programa religioso del ministerio Istúriz debía ocupar un sitio de importancia la atracción de los núcleos eclesiásticos no comprometidos con el carlismo, mediante el debilitamiento de la legislación clerical, lo cual no significa, en modo alguno, que diera por reversible la situación establecida por el proceso desamortizador.

En el plano religioso, el gobierno de José María Calatrava se caracterizaría por haber ejercido una mayor actividad legislatora que ningún otro de los de la etapa 1833-40. Abierto en canal, en su incardinación temporal, el árbol de la Iglesia española durante el gabinete Mendizábal, resultaba inviable la prosecución de una política eclesiástica del mismo signo y por iguales vectores sin herir los centros neurálgicos de su naturaleza espiritual. Al no albergar tal idea, el vasto programa eclesiástico desplegado por el nuevo primer ministro careció en numerosos aspectos del ímpetu creador y novedoso que tuvo el del famoso hacendista gaditano. La mayor parte de sus disposiciones estuvieron así dictadas para precisar y extraer todas las consecuencias de la legislación precedente, por cuyos cauces volvía de nuevo a correr el anticlericalismo y, a veces, el espíritu sectario que dieron tono al progresismo español de mejor ley. Ello se patentiza, quizá con mayor evidencia que ninguna otra de las facetas de la actividad legislatora eclesiástica de Calatrava, en sus medidas para frustrar cualquier intento oposicionista del clero y continuar la reducción de sus efectivos, burocratizándolo y encadenándolo de forma ineluctable al poder. Mención particular dentro de la política religiosa del gabinete del magistrado extremeño debe hacerse al artículo que, en la constitución de 1837, regulaba las relaciones entre el Estado y la Iglesia. En unos momentos en que la guerra civil que ensangrentaba la nación se hallaba en su climax y en el que el proselitismo de las logias masónicas y de los círculos protestantes se mostraba muy activo y virulento, la desembocadura del espíritu y la praxis religiosa, desplegados hasta entonces por el régimen liberal en la tolerancia implícita formulada en el célebre artículo II de dicho texto, no desbordaba los cauces del extremismo y de las posturas maximalistas, aunque algunas de sus cláusulas se insertasen en la más genuina línea del regalismo hispánico. Las Reales órdenes de 15 y 18 de junio de 1837 acerca del modo en que debía jurarse la nueva constitución proporcionan también datos y elementos que revelan, pese a lo que de concesión a una fe no sentida



por el legislador pudieran encerrar sus párrafos, su respeto, al menos formal, por la religión del Estado.

En el horizonte que enmarcaba la legislación religiosa del ministerio Bardaxí, ningún espacio de relativa importancia aparecía por recorrer. En medida notablemente más amplia que el ministerio Calatrava, el de su sucesor se limitó a continuar las directrices precedentes, si bien con menor intensidad y fuerza, en una labor puramente residual en la mayor parte de las ocasiones. Ministerio bifronte, con él se inaugura al mismo tiempo en las esferas dirigentes una nueva actitud hacia el estamento eclesiástico. Al quedar descuajado de sus estructuras del Antiguo Régimen y desarbolado todo el armazón institucional que obstruía la plasmación efectiva del sistema liberal, el enraizamiento de la Iglesia española, surgida del trauma de 1835-37, en la nueva situación alumbrada por el triunfo del sistema constitucional se erigía en la tarea más vasta y urgente que en materia religiosa deberían emprender los dirigentes isabelinos. Como queda expuesto, el gobierno Bardaxí fue el primero que la acometió, particularmente con su intento de echar las bases sobre las que asentase la solución definitiva de una de las más graves herencias legadas por la desamortización y la legislación del gabinete Calatrava: la provisión del culto y clero, en frase del aparato burocrático de la época. Tanto los ministerios del conde de Ofalia y del duque de Frías —sobre todo el primero, ya que algunas de las medidas eclesiásticas del último se inscriben dentro de la trayectoria anticlerical precedente— prosiguieron el camino trazado por Bardaxí. Sería, sin embargo, el último gabinete de la regencia de M.<sup>a</sup> Cristina, presidido por D. Evaristo Pérez de Castro, el que diese satisfacción a las aspiraciones de las masas conservadoras y a la mayor parte del estamento eclesiástico. El debilitamiento de la causa carlista y la marcada proclividad hacia un programa de concordia y reconciliación contribuyeron a que el clero desarmase su antigua postura de hostilidad hacia el régimen liberal. A partir del otoño de 1839, la pacificación religiosa se dibujaba cada día con más poderosos títulos a erigirse en el objetivo principal de todos los perseguidos por el gabinete. Particularmente los meses de junio y julio presenciaron el remate de una serie de disposiciones acordadas por los tres ministerios precedentes en orden a resolver el problema de la situación material del clero, muchos de cuyos miembros se hallaban en la indigencia más completa. En 21 de junio y 16 de julio se dictaban sendas órdenes para la cobranza del

medio diezmo y primicias y para la percepción de la dotación de culto y clero mediante la entrega del 4 % de los productos agrícolas, aunque parte no escasa de los recursos ingresados en la Hacienda estatal para atender a tales necesidades se destinaron en ocasiones a cubrir otras de sus urgencias.

La subida al poder del vencedor de la guerra civil en el otoño de 1840 abrió nuevamente las compuertas de la persecución anticlerical con una drasticidad y radicalismo superiores a los alcanzados hasta entonces por ningún otro gobierno progresista, aunque no por bordear a veces los límites del cisma revistiese un carácter o un signo anticristianos. Algunos de los actos iniciales de los nuevos gobernantes dieron ya la medida exacta de su conducta y posiciones en materia eclesiástica y de la energía que pondrían a su servicio. En diciembre de 1840, en represalia por haber criticado algunas de las disposiciones del gobierno y de las juntas progresistas, fue expulsado de la nación el Vicerregente de la Nunciatura, D. José Ramírez de Arellano<sup>33</sup>. La respuesta del Papa Capellari, vertida a través de la célebre alocución consistorial de 1-III-1841 ("Afflictas in Hispania res"), en la que se lamentaba del recrudecimiento de la persecución anticatólica en España, fue, a su vez, contestada por el gobierno a través principalmente de un violento manifiesto (30-VII-1841), en el que hallaban cabida los más duros ataques a la Santa Sede, considerada en el documento como mera potencia temporal, enemiga acerba de la nación española. Deslizado por una pendiente que desembocaba de modo inexorable en el cisma, el ministro de Justicia del gabinete González, D. José Alonso presentó a las Cortes sendos proyectos de ley (31-XII-1841 y 20-I-1842) por los que se abolía, respectivamente, la jurisdicción eclesiástica ordinaria en casi todas sus dimensiones y se rompían amarras con Roma, quedando en la práctica la Iglesia autónoma española. Ambos proyectos no prosperaron en las Cortes, que ni tan siquiera llegaron a discutirlos, a causa sin duda de un mínimo sentido de realismo político. La réplica del enérgico Gregorio XVI fue la publicación de la Carta Apostólica "Catholicae religionis" (22-II-1842) en la que todos los actos de la Regencia esparterista eran objeto de severos juicios<sup>34</sup>.

33. J. BÉCKER, *Relaciones entre España...*, 122-8.

34. En la actualidad, el P. José Inchausti prepara bajo nuestra dirección un estudio acerca de la política religiosa de la Regencia esparterista, cuya publicación aportará un importante jalón a un período prácticamente desconocido por la historiografía.



Entre tanto la profusa labor legislativa de aquélla en relación al ordenamiento de la Iglesia nacional —más de 160 leyes, decretos y órdenes, de los que más de la mitad corresponden al gabinete González y el resto, en su casi totalidad, al del general Rodill— le habían granjeado la hostilidad casi unánime del clero, incluso la del urbano, en el que hasta entonces reclutara el progresista algunos de sus más ardientes y entusiastas adeptos. Sin embargo, como lo evidenció sin lugar a dudas la fracasada intentona de Diego de León en octubre de 1841, dicha hostilidad no se explicitaría nunca mediante la intervención del clero en las diversas conspiraciones contra el regente. Centrada de modo primordial sobre la situación material del estamento eclesiástico y en su estatuto jurídico dentro de la sociedad surgida del consolidamiento de sistema liberal —reforma del clero, administración de los bienes nacionales (estrechamente involucrada en la coyuntura hacendística), reincorporación de los exclaustrados en la comunidad nacional—, las más importantes disposiciones de esta legislación fueron la de 23-VIII-1841, cuyo primer artículo<sup>35</sup> rezaba así: “Todas las propiedades del clero secular en cualesquiera clase de predios, derechos y acciones que consistan, de cualquiera origen y nombre que sean y con cualquier aplicación o destino con que hayan sido donadas, compradas o adquiridas, son bienes nacionales”; y la de 14-VIII del mismo año, por la que una vez anulada ya la ley de 16-VII-1840, la atención de los gastos de culto y clero correría en adelante a cargo de los derechos de estola u otros similares (salvo lo exceptuado por el Gobierno), y lo “que faltare será cubierto por los vecinos a tenor de los haberes de cada uno”. En tanto que, pese a la imposición de una tributación superior a la entregada por el pueblo en tiempos de la existencia del diezmo, la dotación del culto y clero no se hacía efectiva nada más que en proporciones mínimas y ello sólo en determinadas regiones, la venta de los bienes del clero secular —malbaratados casi siempre y objeto de múltiples especulaciones— daba lugar a numerosos actos de desmaña e, incluso, de vandalismo que causaron incontables e irreparables pérdidas de preciados tesoros artísticos y culturales, hasta el extremo de suscitar airadas protestas en determinados ambientes progresistas.

La agudización del enfrentamiento con el gobierno que tales hechos

35. R. decreto de 2-IX-1841, p. 614.

hubieron de provocar en la inmensa mayoría del clero alcanzaron su clímax cuando los obispos preconizados por la Regencia y elegidos, casi siempre coactivamente, por sus respectivos cabildos como gobernadores eclesiásticos, desearon hacer efectiva la circular de 14-XII-1841, por la que se reiteraban los términos del decreto de 29-XI-1835 ya citado. Con la aplicación real de tal orden, tanto el gobierno como sus obispos aspiraban no sólo a acabar con la resistencia eclesiástica sino también, y en primer lugar, lograr su acatamiento a las innovaciones introducidas por el poder en la disciplina interna de la Iglesia. La negativa de numerosos cuerpos capitulares y de sacerdotes aislados a obedecer esta segunda intención gobernante aumentó aún más el escisionismo eclesiástico y provocó numerosas encarcelamientos, deportaciones y encausamientos de diversos prelados —algunos de los cuales, incluso los afectos al régimen constitucional, habían sido llevados ya a los tribunales civiles por discrepar de la política eclesiástica de la Regencia—, cabildos y clérigos, contra los que se llegó a solicitar, a veces, por el ministerio fiscal la pena de muerte. Al finalizar 1842, menos de una docena de sedes —desde 1836 todas las Metropolitanas estaban vacantes por muerte o destierro de sus pastores —se hallaban provistas de sus legítimos Obispos. Pese a ello, y con la excepción de lo ocurrido en las grandes ciudades, sobre todo en Sevilla, el sacerdocio no llegó prácticamente a participar en el golpe de fuerza que arrojaría de la Regencia al Duque de la Victoria en mayo-julio de 1834<sup>36</sup>.

La caída de Espartero y la subida al poder del partido moderado abocaron a la Iglesia española a nuevos horizontes. La suspensión de la venta de las propiedades eclesiásticas, la devolución al clero secular de los bienes no enajenados (sin duda, los de menos valor), la nueva redacción del artículo 11 de la Constitución de 1845 que declaraba de manera explícita y terminante la unidad religiosa de la Monarquía, la vuelta de los obispos desterrados a sus Sillas, el restablecimiento del Tribunal de la Rota, y la intervención de las tropas de Fernández de Córdoba en favor del Papa Mastai, señalaron, en líneas generales, la

36. Vid. nuestro trabajo, próximo a aparecer en "Anuario de Estudios Atlánticos", *Vida y pensamiento de D. Judas José Romo, Cardenal arzobispo de Sevilla*. En su *Historia política de España (1800-1967)*, Madrid, 1968, D. SEVILLA ANDRÉS, con el refrendo de la casi totalidad de los autores de la época subraya repetidamente la unanimidad del sentimiento antiesparterista. Sin poner en duda la exactitud de tal aserto debe resaltarse cómo la postura del clero no ha sido aún monográficamente estudiada.



buena voluntad de algunos gabinetes moderados y, sobre todo, de ciertos de sus prohombres, como D. Pedro José Pidal o D. Luis Mayans, para con la Iglesia y el Papado, el cual, ya desde los últimos años del pontificado de Gregorio XVI, había mostrado su deseo de llegar pronto al restablecimiento de las relaciones con la monarquía isabelina; cristalizando las negociaciones emprendidas un lustro atrás con la aceptación del régimen de Isabel II por Pío IX en 1848. Antes de que dicho reconocimiento se verificase solemnemente, la llegada a Madrid de Monseñor Brunelli, arzobispo de Tesalónica, como delegado pontificio permitió la confirmación episcopal de una amplia hornada de nuevos prelados, hasta el punto de que, a fines de 1849, sólo quedaban por proveer, a la espera de la nueva reestructuración diocesana prevista por el Concordato en curso, las de Albarracín, Ceuta, Ciudad-Rodrigo, Huesca, Menorca, Plasencia, Solsona, Tenerife, Tudela y Zamora<sup>37</sup>. Por último, el 16 de marzo de 1851 fue firmado un Concordato, en el que a costa de ciertas concesiones, las principales diferencias entre el Estado y la Iglesia quedaban zanjadas. Ortodoxia y control de la enseñanza, reconocimiento a la Iglesia del derecho a poseer bienes, dotación al clero a manera de indemnización por la desamortización, he aquí enumeradas las más importantes garantías conseguidas por la Santa Sede de la monarquía isabelina, que, por su parte, lograba el reconocimiento por aquélla de la irreversibilidad y legitimidad de las ventas de las propiedades eclesiásticas durante el período precedente. De estas mutuas concesiones se extrajeron fórmulas aceptables para ambas potestades, trazando un camino por el que discurrirían, salvo algunas intermitencias, sus relaciones hasta el advenimiento de la II República en 1931<sup>38</sup>.

La nueva situación configurada por tales acontecimientos obligó a los cuadros eclesiásticos a replantear sobre bases distintas todo su programa apologético y pastoral. La mayor parte de las energías gastadas en la obstrucción, primero, y en la defensa y enfrentamiento, después, del sistema constitucional tendrían que ser encauzadas ahora por otros canales más de acuerdo con su misión y carácter. Una vez firmado el

37. F. SUÁREZ, *Génesis del Concordato de 1851*, "Ivs Canonicvm", III (1963), 96-8.

38. Vid. la obra, tan rica en información, no siempre bien decantada, de J. PÉREZ ALHAMA, *La Iglesia y el Estado. Estudio histórico-jurídico a través del Concordato*. Madrid, 1967. En ella se anuncia la publicación de un nuevo estudio sobre el Convenio de 1859, acerca del cual prepara también el autor de estas líneas otro trabajo, aunque desde perspectivas distintas a las del citado canonista.

Concordato de Bravo Murillo, la labor del Episcopado y del clero se centró monóticamente en torno a una vasta obra de reconstrucción y reorganización administrativa y catequística, en la que se consiguieron importantes y, a veces, sobresalientes realizaciones<sup>39</sup>.

El bienio progresista abrió un paréntesis en las relaciones de la Iglesia y Estado españoles, presididas en los años finales de la década moderada por una aparatosa armonía, encubridora, de una y otra parte, en no pocas ocasiones, de cenizas prontas a convertirse en brasas. Así lo demostraría el gobierno esparterista, con el que afloraron de nuevo a la vida política, con renovada pujanza, las corrientes anticlericales, nunca extinguidas por completo durante el período precedente. Sin que ello supusiera ninguna innovación en una práctica regalista siempre vigorosa y alertada, en el país que más ferviente partidario se había mostrado de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, la Bula "Ineffabilis Deus" que lo consagraba, era retenida durante algún tiempo por atentatoria a las regalías, mientras que en las Cortes constituyentes tenían lugar encrespadas polémicas entre los defensores del principio religioso como eje vertebrador del ser histórico español y los opuestos al mantenimiento de su unidad religiosa oficial.

La abierta hostilidad manifestada por el gobierno del Príncipe de Vergara hacia el clero, muy pródiga durante esta etapa en ciertos elementos de su jerarquía nacional en ejercitar celosamente el derecho de protesta, y la promulgación de órdenes y decretos que vulneraban los artículos del Concordato —leyes desamortizadoras, prohibición a los Obispos de conferir Ordenes, encausamiento de varios de ellos, etc.— obligaron a Roma a suspender sus relaciones diplomáticas con el Estado español<sup>40</sup>.

Los años inmediatos a la terminación del Bienio progresista asistieron a la luna de miel entre la Iglesia y la monarquía isabelina, reflejo en gran parte del ascendiente de Claret sobre el ánimo regio y de la estancia en el poder de los prohombres moderados, rematada a partir de 1858 con su detentación por los unionistas. Fortalecida por su victoria moral y efectiva sobre el régimen esparterista —en cuya caída

39. J. M. CUENCA TORIBIO, *La actuación del prelado cordobés don Juan Alfonso de Alburquerque durante la última fase de la monarquía isabelina (1858-1867)*. "Anuario de Estudios Hispanoamericanos", 23, I (1967).

40. J. BÉCKER, *Relaciones diplomáticas entre...*, 168 y ss.



representó una intervención decisiva— y por la colaboración prestada por las esferas gobernantes, la Iglesia española renació por un momento a la esperanza de alcanzar, dentro de un clima semejante a sus ojos, en cierta medida, al de la alianza entre el “Altar y el Trono”, las metas propuestas una década atrás. Aleccionado, sin embargo, por repetidas experiencias y receloso en última instancia del sistema constitucional, aunque no de muchos de sus adeptos en su vertiente moderada, el episcopado pretendió soslayar la trampa tendida por el poder para encadenarlo a su suerte mediante la adhesión sin reservas a Isabel II, inseparable en la mayor parte de las ocasiones de un manifiesto desvío y hostilidad hacia la revolución; vocablo que había sustituido, en el lenguaje de numerosos prelados, al término, más concreto y de resonancias más comprometidas, de liberalismo.

1860 señaló el punto culminante de las estrechas relaciones entre la Iglesia y el gobierno de la Unión Liberal. La oleada de exaltación monárquica provocada por la guerra de Africa encontró en el clero y episcopado nacionales uno de sus más grandilocuentes e indesmayables portavoces. La escasa dimensión efectiva de la victoria militar española frustraría, no obstante, la materialización de los planes misionales acariciados por la jerarquía. Las armas y recursos espirituales movilizadas para la ofensiva evangélica antimusulmana cambiaron de objetivo y se aprestaron a la lucha a ultranza contra las fuerzas protestantes operantes en la nación. Un elevado número de las manifestaciones de la exuberante literatura episcopal concerniente al tema —pastorales, representaciones a la Corona y sus ministros, exhortaciones a los fieles— deja traslucir, cuando no la explicita claramente, la acusación dirigida al poder de favorecer con su lenidad o indiferencia la propagación de las doctrinas protestantes y, en general, de las corrientes heterodoxas, que cada día cobraban mayor auge en todos los ámbitos de la Monarquía. Pese a la densa niebla historiográfica que envuelve aún los orígenes del protestantismo peninsular decimonónico, no es muy aventurado conjeturar la relativa exactitud de las denuncias formuladas por el episcopado isabelino respecto a la escasa efectividad de las leyes y medidas adoptadas contra sus núcleos radicados en el país. Sus propias bases programáticas y la persistente corriente en los sectores más radicalizados y ardorosos en pro de la consagración civil de la libertad de conciencia, obligaban a los gabinetes moderados y unionistas —permanente fuente de conflictos con la Reina— a no llegar

en su actitud religiosa a las situaciones límites, deseadas, de acuerdo con el texto del Concoradato, por numerosos prelados<sup>41</sup>.

El triple vector de la posición anticlerical del progresismo —desamortización de los últimos bienes eclesiásticos, reconocimiento del reino de Italia, implantación del pluralismo religioso— orientaba así en el inicio de la década de los 60, en una de sus direcciones, la postura de los círculos gobernantes. Agrietada un tanto la estrecha alianza del quinquenio anterior, la apertura de aquéllos, muy lenta y moderada en los comienzos, hacia un lejano, pero no descartable, reconocimiento de la unificación italiana por la monarquía saboyana, acrecentó hacia el sistema constitucional la desconfianza en bloque del episcopado, que cifraría ya de manera exclusiva, sin acepción de las fuerzas en el poder, la virtualidad de su maximalista programa en el valimiento de la reina, presa en este punto, como en algunos otros de su actuación, de encontradas opiniones y sentimientos.

La publicación de la "Quanta Cura" y el "Syllabus" en diciembre de 1864 introduciría nuevas fisuras en las relaciones entre la Iglesia y el "establishment" isabelino. La polvareda levantada por los documentos pontificios en los países de vieja Cristiandad alcanzó también a la Península, aunque con una particularidad reveladora de su peculiar situación religiosa. Mientras que en Francia, Bélgica, Italia, Alemania o incluso, dentro de aquélla, Portugal, las reacciones provocadas por la publicación de los textos papales surgieron simultáneamente del seno de las esfera estatales y de algunos núcleos vanguardistas católicos, en España el desagrado producido por los citados escritos sólo afectó a los círculos gubernamentales, aparte, bien se entiende, de los sectores marginados de la ortodoxia, quienes arreciarían en sus ataques a una Iglesia condenada a la petrificación... Presionado por las protestas de celosos guardianes del mantenimiento de las regalías y el clamor inconsecuente de algunos periódicos anticlericales, más que por auténtico deseo y convencimiento íntimos, el gabinete presidido por Narváez emprendió, a comienzos de 1875, una defensa, cuando menos formal, de los derechos del Trono en materia eclesiástica, conculcados

41. J. M. CUENCA TORIBIO, *La jerarquía eclesiástica en el reinado de Isabel II*. "Atlántida", 36 (1968). Id., *El protestantismo visto por el prelado barcelonés, José Domingo Costa y Borrás (1850-1857). Contribución a los orígenes de la segunda reforma española*. "Analecta Sacra Tarraconensia" (1969).



por un episcopado que no había esperado a recibir los textos de Pío IX a través de los canales gubernamentales para darlos a conocer a sus fieles. La infracción de las disposiciones regalistas era tan patente como desairada la postura de un ministerio enterado por la prensa de los célebres documentos. Colocado ante el hecho consumado y reacio, según se ha expuesto, a adentrarse por un camino erizado de dificultades, el gobierno intentó hallar una solución de compromiso que dejara a salvo el prestigio del poder. Tras la resolución pertinente del Consejo de Estado, cuyo dictamen había sido requerido, el gabinete halló cómodo el expediente de atribuir el desacato episcopal al desconocimiento de la legislación vigente en la materia —algo ambigua en el punto debatido, según los portavoces ministeriales—, como asimismo a la libertad de prensa, en cuyo disfrute habían recogido los periódicos nacionales los textos pontificios aparecidos en diarios extranjeros; libertad de la que no estaban privados los órganos informativos diocesanos. Las contradicciones de un estado liberal, deseoso de que no se agotase la estrecha tutela sobre la Iglesia heredada de los poderes del Antiguo Régimen, se manifestaban así ostensibles en el Real decreto de 6-III-1865 que, con carácter retroactivo, daba curso legal a la “Quanta Cura” y al “Syllabus” desde la fecha misma de su aparición. Ninguna referencia en sus párrafos al estatismo condenado por dichos escritos, ninguna alusión a los títulos de legitimidad poseídos por la Santa Sede para publicar, sin la anuencia de los poderes temporales, documentos de carácter dogmático<sup>42</sup>.

El reinado de Isabel II, tan pródigo en polvaredas polémicas, no asistió en el terreno eclesiástico, presumiblemente, a ninguna tan enconada como la levantada por el reconocimiento del reino de Italia en julio de 1865. Frente a la protesta inmatizada y airada de gran número de prelados, los más familiarizados con las realidades de la política internacional, comprendiendo que el reconocimiento era inevitable, aspiraron a limitar el alcance de este mal menor y presionaron al duque de Tetuán para que obtuviera del gobierno italiano garantías de que el territorio aún en poder de la Santa Sede quedaría a salvo de futuras expansiones de la dinastía piamontesa. Postura a la que Roma, aun-

42. *Id.*, *El pontificado pamplonés de D. Pedro Cirilo Uriz y Labayru (1862-1870)*. “Hispania Sacra”, 43-4 (1969).

que la observaba con simpatía, no podía dar su respaldo oficial sin desautorizar la actitud maximalista adoptada por la mayor parte de la jerarquía hispana. Esta, “más papista que el Papa”, no acertó a ver cómo el curso de los acontecimientos había ejercido su influjo en la actitud de la Santa Sede, cuyos objetivos se hallaban en 1865, tras la firma de la Convención francosaboyana de septiembre del anterior, algo desplazados del terreno que ocupara tres años atrás, fecha de la famosa ratificación por el episcopado mundial de la política mantenida por Pío IX frente a Víctor Manuel II. Por otra parte, la rapidez con que el gobierno de éste fue reconocido por el gabinete O'Donnell, deseo de frustrar así las consecuencias de las reacciones y protestas eclesiásticas, impidió que Roma trazase a la jerarquía española consignas acomodadas a la situación del momento. Con todo, quizá el duque de Tetuán cometiese, cara al episcopado, el error táctico de tremolar desde el inicio de su gestión la bandera de una actitud prosaboyana. Empero, de cualquier modo, no conviene olvidar cómo factores muy poderosos condicionaron esta posición de su gabinete, necesitado y esperanzado en incorporar a los sectores más reacios a la aventura revolucionaria del progresismo, durante la última atracción que éste experimentara del imán isabelino. Pero, aun así, ofrece serias dudas juzgar acertadas las reacciones episcopales frente a O'Donnell, cuyo mandato anterior había sido, al fin y a la postre, muy beneficioso para la empresa restauradora acometida por la Iglesia hispana y cuya posición frente a la pugna entre Florencia y Roma no podía ser, pese a todo, más favorable a la última<sup>43</sup>.

Calmada un tanto a fines de 1865 la “cuestión romana” como efecto de los diversos y amistosos contactos entre representantes de la Santa Sede y de la monarquía saboyana, el fracaso en que, ya entrado 1866, desembocaron aquéllos y el anuncio por la cancillería napoleónica de la evacuación del cuerpo de ejército francés acampamentado en la Urbe, volvieron a enconar las pasiones en torno a la soberanía temporal del Papado. Periódicos y folletos anticlericales profetizaron el fin inminente del Papado como potestad terrena, mientras que un gran número de prelados dirigía a sus fieles escritos pastorales destina-

43. F. A. AGUILAR, en su *Compendio de Historia eclesiástica general*. Madrid, II, 1885, aún reconociendo el saldo positivo para la Iglesia española de la primera singlatura gobernante del duque de Tetuán se muestra muy hostil a la segunda, p. 462.



dos a mantener su fe y confianza en la Iglesia. Desprovista la monarquía de piezas de recambio para su dinámica política y forzado el partido moderado a un solitario ejercicio del poder, el último gabinete presidido por Narváez, deseoso a toda costa de ensanchar las bases del sistema isabelino, no regateó en esta ocasión su simpatía por algunos de dichos escritos, aunque no se tradujese en ninguna nueva toma de posiciones ante el tema<sup>44</sup>.

Las experiencias adquiridas en el transcurso de los años anteriores, junto con su misma mentalidad, hacían de la casi totalidad de la jerarquía uno de los instrumentos más idóneos de la reacción que trajo consigo el final de la monarquía isabelina, y en cuya génesis ofrece un interés innegable calibrar la posible participación que el episcopado pudo protagonizar. En dicho terreno, sea cual fuere el grado de ésta en caso de haberla, es indudable la adhesión inquebrantable de la jerarquía hacia el Trono al entrar en su colapso final e intensificarse los ataques de la oposición, que en el extranjero se aprestaba a coordinar esfuerzos y programas a la espera del asalto definitivo. Momento en que los prelados rivalizaron entre sí por manifestar hacia la Corona unos sentimientos que parecían traducir arraigadas convicciones, aunque no desprovistas de temor ante lo desconocido. El retorno de días añorados por ambas potestades vino seguido, como era presumible, de concesiones por parte del poder a algunos puntos de las reivindicaciones episcopales, en particular a la represión de los ataques anticlericales dirigidos por determinados sectores. Con posterioridad, el gran influjo ejercido por la jerarquía se amplió a materias docentes, logrando que la enseñanza religiosa ocupara un lugar sobresaliente en los planes de estudio. Obvio es señalar que fue Claret el principal artífice de tales medidas, respaldadas unánimemente por todos los prelados<sup>45</sup>. El destronamiento de Isabel II cortaría, sin embargo, en flor la realización de la mayoría de tales disposiciones, invigentes, por lo general, cuando la "Gloriosa" adquirió carta de naturaleza en la historia española, de la que habría de ser piedra miliar, agigantada al paso del tiempo.

44. J. M. CUENCA TORIBIO, *El pontificado pamplonés...*

45. C. FERNÁNDEZ, *El confesor de Isabel II y sus actividades en Madrid*, Madrid, 19-64, 319.

El triunfo y consolidación de la "Septembrina" inauguró en la historia del catolicismo español un capítulo inédito y rigurosamente desenraizado. Las medidas adoptadas en el terreno religioso por las diversas juntas en las que se atomizó el poder en las últimas jornadas de setiembre e iniciales de octubre, configuraron una situación profundamente novedosa, comparable tan sólo con la generada por la II República y, en algunos aspectos, con la comenzada a bosquejar tras el Vaticano II. Mientras que todas establecían la libertad religiosa, su maximalismo anticlerical reforzaba en numerosas localidades los efectos de los desmanes de que habían sido víctimas el culto católico y sus ministros así como diversos enseres y edificios durante las primeras horas de la revolución. Tales hechos no encontraron en un primer momento ninguna respuesta oficial y pública del episcopado, debido, entre otras causas, a que atribuía su responsabilidad a elementos exaltados muy difíciles de controlar por unas autoridades, a su vez, poco consolidadas y que mostraban, casi sin excepción, gran renuencia a establecer contacto con un estamento considerado como el símbolo de los obstáculos que se oponían a la realización de sus ideales y programas. Ante tal tesitura, el único camino viable ofrecido a la jerarquía y el más conforme con la conducta de la Iglesia en trances semejantes era esperar a que, una vez desaparecida o debilitada la pleamar anticlerical y robustecido el gobierno provisional, fuera posible tender puentes de acercamiento entre ambas potestades. Por lo demás, las proclamas iniciales de los caudillos de la revolución, en las que expusieran los grandes puntos de su futuro programa gobernante, no habían dejado entrever ninguna hostilidad hacia el "ordo clericalis", del que algunas recababan su apoyo para la consecución de la empresa que se disponían a acometer; muchos de cuyos extremos, sin embargo, entrañaban un claro desafío a la estructura y mentalidad de los cuadros eclesiásticos de la época<sup>46</sup>.

De ser ciertas, sus esperanzas quedaron defraudadas cuando, a mediados de octubre, el gabinete provisional dictó toda una serie de disposiciones de acentuado sabor anticlerical, que recordaban en muchos de sus aspectos a las del liberalismo naciente. Sucesivas leyes determina-

46. J. M. CUENCA TORIBIO, *El episcopado catalán ante la revolución de 1868*. "Analecta sacra Tarraconensia", XL (1967).



ron la expulsión de los Jesuitas, la supresión de todas las comunidades religiosas fundadas a partir del decreto dado por ministerio Calatrava en 29-VII-1837, la desaparición de las Conferencias de San Vicente de Paúl, la anulación de las subvenciones estatales a los Seminarios y, el 6-XII del mismo año de 1868, la derogación del fuero eclesiástico hasta tanto se entablasen negociaciones con Roma en vista a la conclusión de un acuerdo definitivo en tal materia. Percatado de que tras su promulgación ningún sector del estamento religioso dejaba de ser afectado por las disposiciones del nuevo poder, la reacción del episcopado fue muy viva y contundente, aunque dentro de una dignidad sustancial se diese una amplia gama de matices y posiciones en las representaciones que todos los Metropolitanos junto con sus sufragáneos dirigieron al gobierno provisional presidido por Serrano. Aparte de la denuncia de las medidas adoptadas por éste, que vulneraban, según la opinión de la jerarquía, el texto concordatario, el eje articulador de la totalidad de sus representaciones y escritos venía dado por la crítica de las aspiraciones librecultistas que abrigaban los dirigentes de la nueva situación, deseosos de su inmediato encauzamiento jurídico y legal. Frente a un Estado de muy tibia confesionalidad y ante una coyuntura desprovista en amplia escala de los presupuestos de la época isabelina, los argumentos en pro de la unidad de la fe deberían extraerse, para alcanzar sus objetivos, de un programa en armonía con la hora presente y capaz, además, de conmoverla. Por ende con diverso acierto, con los datos y elementos vigentes en una situación articulada esencialmente —al menos en sus declaraciones programáticas— en torno al principio democrático y a la ley del número. Desde esta óptica, era incontestable que la masa del pueblo español permanecía firme, en opinión unánime de sus prelados, a sus creencias tradicionales que deberían ser salvaguardadas a toda costa por un Estado —hecha abstracción de su confesionalidad o aconfesionalidad— preocupado con sinceridad por el bien temporal de sus súbditos. En tal supuesto, el reconocimiento civil y jurídico de la libertad de cultos significaría, a más de una grave ofensa al sentimiento mayoritario, un fuerte obstáculo para la paz ciudadana y la consecución del bien común temporal. A juicio de la jerarquía, las nociones y conceptos de libertad religiosa explicitados por sus preconizadores respondían tan sólo, en el mejor de los casos, a una consideración jurídico-ideológica del tema, cerrada así por tanto a su realidad más profunda de orden teológico-moral,

inoslayable si se deseaba verdaderamente colocar la cuestión en sus auténticas dimensiones<sup>47</sup>.

Junto con el tema axial de la libertad religiosa, otro directamente relacionado con él, el de la tolerancia, fue también abordado por la mayor parte de los prelados en su enfrentamiento con el poder. Igualmente que en el primero, la jerarquía mantuvo una actitud totorresista en el pleito de la tolerancia, por considerar que ésta ya se hallaba consagrada "de facto" en las costumbres del país, que hacían innecesaria su formulación jurídica, de la que sólo se derivarían grandes males para la nación. En el repudio de la teoría del "mal menor" —de tan amplia aceptación y audiencia tiempo adelante—, en no haber sabido comprender el alto valor simbólico que para extensos sectores del momento encarnaba la libertad religiosa como desarticulación y arrumbamiento de la España feudal y obscurantista, enfocada su actuación desde perspectivas posteriores, estribó el error del episcopado en su planteamiento de una cuestión, que ensanchaba el ya grande escisionismo que desgarraba a la conciencia nacional. En un país en que la controversia religiosa alcanzaba temperaturas de ebullición, en el que se llegaba al linchamiento de una autoridad que sólo cumplía con su deber en el que los discursos y controversias ateas se enseñoreaban de los círculos intelectuales y de las tribunas de los clubs, y las sátiras y caricaturas anticlericales más nauseabundas llenaban las páginas de gran número de periódicos, la constitución de 1869 consagraba, al fin, una de las banderas nunca arriadas por los sectores más ardientes del liberalismo ochocentistas desde los días de Cádiz: la libertad de cultos (6-VI). Obviamente, aunque el Estado se comprometiese a sufragar los gastos de culto y clero y reconociese al catolicismo como religión oficial, su declaración librecultista había de provocar una honda sacudida en la regulación de un Concordato, todavía vigente pese a las ostensibles contraposiciones de su texto con el constitucional. Proyectadas, pues, las relaciones entre la Iglesia y el Poder en un plano hasta entonces desconocido, su curso durante toda

47. *Id.*, *La revolución de 1868 y el episcopado de la Baja Andalucía*. "Anales de la Universidad hispalense", XXVII (1967); N. GONZÁLEZ, *Análisis, concepción y alcance de la revolución de 1868*. "Razón y Fe", 851 (1968), 458-61.



la "Interinidad" habría de ser, *a fortiori*, muy accidentado y no infundado en problemas<sup>48</sup>.

Antes de que el episcopado pudiera rehacerse de la conmoción que le causara el artículo II de la Constitución y antes también de que la regencia del general Serrano hubiera dispuesto de tiempo para poner en marcha, gradual y dosificadamente, la nueva política eclesiástica exigida por la situación, el signo del maximalismo presidiría una vez más, la siempre difícil convivencia entre ambas potestades. Enfrentado, a raíz mismo de la publicación de la Constitución, con la resuelta y abnegada negativa del clero a jurarla pese a la privación de sus haberes con que intentó hacerle desistir de su actitud el gobierno, éste no tardó en adoptar una serie de disposiciones, dictadas y, sobre todo, aplicadas en ocasiones con un exceso de inútil autoritarismo; como, por ejemplo, la de la incautación de los tesoros artísticos y culturales de monasterios e iglesias. El levantamiento de algunas partidas carlistas, de las que se sospechaba contaban con el concurso del clero, en el mismo verano de 1869, dio nuevas alas al radicalismo de los gobernantes madrileños, que parecía imprimir la tónica a sus relaciones con la Iglesia. La declinación por su parte en los obispos de la responsabilidad de los eventuales conflictos y alteraciones del orden público que podían producirse en sus diócesis a consecuencia de la supuesta rebeldía de algunos eclesiásticos, provocó la repulsa de la jerarquía, varios de cuyos miembros serían por ello encausados por el poder civil. En tal coyuntura, el fantasma de una inminente reaparición de la teocracia en el próximo Concilio, propagado a los cuatro vientos por amplios artículos periodísticos e intelectuales, incluso, ministeriales, no dejaría de ser desaprovechado por el Estado como una nueva arma en su política anticlerical. Tras un duelo de amenazas y desafíos entre dichos sectores y el episcopado y las masas católicas, los prelados españoles pudieron concurrir sin impedimento alguno de relieve a las sesiones del Vaticano I, sin descuidar por ello el seguir atentamente la marcha de los sucesos nacionales y de la evolución de la controversia religiosa<sup>49</sup>.

En los años siguientes, la trayectoria de ésta se vería impelida por

48. Id., *El episcopado pamplonés...*

49. J. MARTÍN TEJEDOR, *España y el Concilio Vaticano I*. "Hispania Sacra", 39 (1967), 17.

un anticlericalismo y una secularización crecientes. El de 1870 asistiría al triunfo de otra de las banderas continuamente enarboladas por el sector más dinamizado del liberalismo hispánico: el matrimonio civil; denostado con aspereza por el clero y el episcopado, hasta el extremo de que los prelados asistentes al Concilio enviaron una protesta colectiva al gobierno por su implantación. La entronización de la dinastía saboyana, usurpadora a los ojos de la jerarquía nacional de la legítima e indispensable soberanía temporal del Papado, agravó aún más las ya muy tensionadas relaciones entre el Estado y la Iglesia españoles. Rasgo común de los diferentes gobiernos de la monarquía amadeísta sería la prosecución de las tendencias secularizadoras, perfiladas en los años inmediatamente anteriores<sup>50</sup>.

Al tiempo que desde la prensa y las aulas universitarias —en donde la libertad de enseñanza se había establecido en 1869 con la expulsión simultánea de ellas de los catedráticos que se negaron a aceptarla— se reclamaba insistentemente la completa separación entre la Iglesia y el Estado, los gobernantes planeaban la secularización de los cementerios y de la enseñanza en todos sus grados asimismo como una reforma general de la organización eclesiástica. Su propugnador e impulsor, el célebre político y canonista Montero Ríos, aspiraba con ella a una drástica reducción del presupuesto del culto y clero y a una mejora sustancial de la situación, rayana en la miseria, en que se hallaba inmerso desde hacía largo tiempo el clero parroquial, en vivo contraste con las elevadas sumas recibidas del Estado por el episcopado y el clero catedral.

Con el comienzo de la tercera guerra carlista y la implantación, posteriormente, de la I República, el extremismo hizo de nuevo acto de presencia en la vida española, de modo particular en su ordenamiento eclesiástico. La quema de numerosos edificios religiosos, la servicia desplegada en la destrucción y aniquilamiento de bienes inestimables del patrimonio espiritual de la Iglesia y pueblo españoles, el asesinato por “delitos” religiosos, la predicación desde algunos púlpitos

50. Vid. F. J. MONTALBÁN, *Historia de la Iglesia Católica*, Madrid, IV, 1951, 612-3, con acentuado prejuicio antiliberal. Tanto R. CARR, *España, 1808-1939*. Barcelona, 1969, como C. A. M. HENNESSY, *La república federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal. 1868-1874*. Madrid, 1966, apenas rozan la problemática religiosa de este período.



de la guerra santa, etc., etc., pusieron de manifiesto la bronca violencia del sentimiento anticlerical y antihumano que se había apoderado de grandes sectores del país, acusando la crisis por la que éste atravesaba. Como coronación del proceso abierto y generado por la "Gloriosa", la nonnata Constitución de la República federal daba sanción legal a la separación de la Iglesia y el Estado, al paso que su articulado contemplaba una total secularización de la existencia civil. La nueva subida al poder de Serrano, tras el golpe de estado de Pavía, embridaría gran parte de la actitud anticlerical de los gobiernos precedentes, aunque sin que los espíritus se adentrasen resueltamente por el camino del diálogo y la tolerancia.

La restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII fue recibida por las masas católicas de la nación —salvo las que militaban en la causa carlista— con enorme júbilo y esperanza. Se deseaba que el joven rey volviese a poner en concordia el trono con la Iglesia, después de aquellos turbulentos años de la Interinidad en que España había conocido todas las formas de gobierno que figuran en los tratados de derecho político. La circular en la que se trazaba todo el futuro programa religioso de la monarquía canovista, dirigida por el ministro de Gracia y Justicia en 2 de enero de 1875 a los prelados y vicarios capitulares participándoles el advenimiento de Alfonso XII, reforzó la confianza y alegría despertada en el clero y fieles por su instauración: "En las relaciones de los Estados católicos con la Iglesia —escribía el ministro— lo que para aquellos es próspero suceso, para ésta no puede menos de ser feliz augurio de bienandanza... La proclamación de nuestro Rey D. Alfonso XII, siendo el verdadero término de aquellos disturbios, será por lo mismo el principio de una nueva era, en la cual se verán restablecidas nuestras buenas relaciones con el Padre común de los fieles, desgraciadamente interrumpidas por los excesos de estos últimos tiempos; se procederá en todo lo que pueda afectar a estas recíprocas relaciones con el consejo de sabios Prelados y de acuerdo con la Santa Sede, y se dará a la Iglesia y a sus ministros toda la protección que se les debe en una Nación como la nuestra eminentemente católica"... Sin pérdida de tiempo, el espíritu y las promesas contenidas en el texto señalado se materializaron en la promulgación de diversas órdenes por las que, principalmente, se derogaban las medidas sancionadas por los regímenes anteriores que causaron mayor escándalo y repudio en la jerarquía, en

especial, la libertad de cátedra y el matrimonio civil. Por negarse a aceptar la supresión de la primera, varios renombrados profesores serían expulsados de la Universidad, con rigor rayano, en algunos casos, en la arbitrariedad.

Sin embargo, las esperanzas de que la monarquía alfonsina consagrara, a la manera de los moderados en 1845, la unidad religiosa de la nación, haciendo caso omiso de la tolerancia propugnada por algunas voces desde la tribuna y la prensa, quedaron defraudadas. Las leyes y fórmulas legales por las que se regirían las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la Restauración se inspiraron en el mismo clima espiritual que informaría toda la obra de Cánovas del Castillo: la ausencia de cualquier exclusivismo y la solución de la vía media para todos los problemas. El artículo —en el que se recogían y amalgamaban los términos de los textos constitucionales de 1854 y 1869, y que fue uno de los más discutidos de la Constitución dada al país en 1876— sancionaba de manera explícita la tolerancia. Como los restantes del Código constitucional canovista, estaba redactado con gran flexibilidad, facilitando así toda clase de interpretaciones y aplicaciones concretas<sup>51</sup>. Pese a ello, el papa Mastai, que ya había dirigido un breve a la jerarquía española (4-III-1876), al tener noticia del texto presentado a las cortes como base de discusión, exponiendo su flagrante contradicción con el artículo I del Concordato vigente, mostró una gran renuencia en aceptar su promulgación definitiva. Sólo la hábil y precisa puntualización del concepto católico de la tolerancia —imposición de un principio de equidad que el legislador-gobernante se limita a aplicar—, formulado, paradójicamente, por el ministro de Estado español, logró disipar algunos de los numerosos temores y escrúpulos del anciano Pontífice. Con todo, el Vaticano expresó su confianza de que las futuras interpretaciones del controvertido artículo no infringiesen la literalidad de sus cláusulas.

Emprendida por cuarta vez a lo largo del siglo una vasta obra restauradora por la jerarquía y clero —primordialmente, el regular y

51. L. SÁNCHEZ AGESTA, *Historia del constitucionalismo español*. Madrid, 1964, 337-9. A. FUENMAYOR, *Estado y religión. (El artículo 6 del Fuero de los españoles)*. "Revista de Estudios Políticos", 152 (1967), 100-04. Cfr. también G. BARBERINI, *El artículo 11 de la Constitución de 1876. La controversia diplomática entre España y la Santa Sede*. Roma, 1962.



las congregaciones, que conocerían durante este período su mayor auge del ochocientos<sup>52</sup>, los años del reinado de Alfonso XII, el Pacificador, y los de la regencia de su segunda mujer fueron, en líneas generales, de paz en las relaciones entre la Iglesia y la Corona. Pequeños incidentes, causados de ordinario por la propia —y aguda— división de los católicos españoles y de su clero, no alteraron, sustancialmente, este panorama de concordia. León XIII expresó repetidas veces —cuestión de las Carolinas, concesión de la Rosa de Oro a la Regente, apadrinamiento de Alfonso XIII, intervenciones para paliar las fricciones entre integristas y partidarios de la Unión Católica, etcétera, etc.— su afecto por España y su régimen, al que se esforzó por consolidar.

Sin embargo, pese al afianzamiento de la obra canovista, al término del “quiquenio glorioso” comenzaron a amontonarse en el horizonte de las relaciones entre la Iglesia y el Estado algunas nubes, que ensombrecerían algún tiempo después su dinámica. Dentro de la gran labor legisladora llevada a cabo por el “Parlamento largo”, en 1887 se promulgaba la célebre ley de asociaciones que disponía taxativamente: “...quedan sometidas a las disposiciones de la misma, las asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo, o cualesquiera otros lícitos, que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia”. Respecto a las asociaciones religiosas, el artículo segundo puntualizaba quedaban exceptuadas “las asociaciones de la religión católica autorizadas en España por el Concordato. Las demás asociaciones religiosas se regirán por esta ley, aunque debiendo acomodarse en sus actos las no católicas a los límites señalados por el art. 11 de la Constitución del Estado”. Aunque la concordia entonces existente entre ambas potestades hizo pasar desapercibido el profundo alcance de dicha ley para el ordenamiento y regulación de las numerosas congregaciones y órdenes establecidas en la España de la Restauración, en el marco de otra coyuntura socio-política podía convertirse, como el tiempo probó, en caballo de batalla y fuente de abundantes situaciones conflictivas. Un año después, la derogación, a instancias de varios prelados senadores, en el Código Civil del canon del Concilio de Trento que prohibía a los religiosos profesos

52. J. M. CUENCA TORIBIO, *La jerarquía eclesiástica...*

la facultad de adquirir bienes para sí, se mostraría igualmente en el futuro grávida de importantes consecuencias. Un nuevo y fundamental elemento, el rebrote del anticlericalismo en la España finisecular, vendría a poner término al remanso por el que discurrieron las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la primera fase del sistema canovista.

El ancho caudal adquirido en aquella hora por un sentimiento y una actitud siempre reverdecidos en los cuadrantes hispánicos se debió a la confluencia en el cruce de uno y otro siglo de una serie de fenómenos presididos todos por la común nota del anticlericalismo. Dentro de las esferas dirigentes, su recrudecimiento fue, en amplia parte, artificial. Clausurado el ciclo de las grandes reformas políticas durante el gabinete Sagasta de 1885-90, los años sucesivos destacaron una realidad que cada día se evidenciaba con más claridad: la escasa diferencia en el ideario de las fuerzas que entraban en la noria del turno. De ahí, la necesidad sentida por los partidos gobernantes de establecer artificialmente fronteras y antagonismos entre sus programas<sup>53</sup>. Las diferencias respecto a la "cuestión religiosa" —meramente tácticas en el sentir de las grandes figuras de la Restauración, con la excepción de Canalejas— se erigieron así en uno de los principales límites de sus respectivos idearios. Junto con el fenómeno apuntado, la pujanza del positivismo en el mundo del pensamiento y del en el de las realidades políticas, la del movimiento republicano, asimismo como las medidas adoptadas en Francia y Portugal en materia eclesiástica, vinieron, entre otros factores y corrientes, a colocar al anticlericalismo en el primer plano de la actualidad nacional en la España de los años iniciales del siglo XX<sup>54</sup>.

Como ocurre a menudo en trances semejantes, la chispa que hizo estallar el polvorín fue el encadenamiento de una serie de sucesos —individualmente de escasa entidad— acaecidos en la bisagra de una centuria a otra. La actitud proclerical del ministro Silvela —explicitada, sobre todo, en la adopción por el ministro de Fomento, marqués de Pi-

53. Ib., *Lección para el futuro de España*. "Nuestro Tiempo", 143 (1966).

54. De manera defraudadora, el ambicioso libro de J. CONNELLY ULLMAN, *The Tragic Week. A study of anticlericalism in Spain*. 187, 75-1.912. Harvard, 1968. De temática y conclusiones mucho más reducidas de lo que su título hace presuponer aborda muy superficialmente el tema, 32-42.



dal, de medidas tendentes al desarrollo de la enseñanza religiosa en los centros estatales—, estimuló la reacción de sus oponentes, que tacharían su política de “vaticanista”. No obstante, fue en el breve gabinete del general Azcárraga (23-XII-1900 - 25-II-1901) cuando eclosionó realmente la mayor y más grave crisis de las acontecidas en las relaciones Iglesia-Estado durante todo el régimen canovista. El estreno de la obra de Pérez Galdós “Electra” simultáneo con la difusión por los medios de información del caso de la Srta. Ubao, muy semejante al tema que el gran novelista escenificaba junto con las frecuentes alteraciones del orden público a que daban lugar las procesiones organizadas en cumplimiento del Jubileo en honor de Cristo Redentor, concedido por León XIII por la entrada del nuevo siglo —a cuya celebración se opusieron, por vía de hecho, en ciertas localidades elementos y grupos anticlericales— convirtió a la “cuestión religiosa” en el más importante de los problemas, junto al matrimonio de la Princesa de Asturias, con que en aquellos momentos se enfrentaba el mundo gobernante<sup>55</sup>.

Conocedor de la gran fuerza que capitalizaría para su partido con el izamiento a tambor batiente de la bandera del anticlericalismo, Sagasta la enarbolaría ahora más alto que nunca. Sus primeras medidas al frente del último gabinete de la Regencia estuvieron dictadas por el propósito de satisfacer las reivindicaciones antieclesiásticas mediante unas leyes destinadas a la galería, que traducían su interna posición frente a tal tendencia, instrumentalizada como arma política de ocasión pero sin vivenciarlo con autenticidad ideológica personal<sup>56</sup>. Escasas semanas después de la llegada de su gabinete al poder, en medio de

55. Es muy sugestivo y novedoso el planteamiento del tema expuesto por M. D. GÓMEZ MOLLEDA, *Los reformadores de la España contemporánea*. Madrid, 1966, 427 y ss. M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, *Historia política de la España contemporánea (Regencia de Doña María Cristina durante la menor edad de su hijo don Alfonso XIII)*. Madrid, 1959, II, 680-1. J. CEPEDA ADÁN, *La figura de Sagasta en la Restauración*. “Hispania” (1963), 595.

56. Un R. D. del ministerio de Industria de 22 de marzo legislaba que todos los establecimientos industriales dirigidos por religiosos debían darse de alta en las delegaciones provinciales de su departamento en orden, sobre todo, a hacer efectivos los correspondientes impuestos, hasta entonces, de ordinario, eludidos. Otro de 27 del mismo mes, a cargo ahora del ministerio de la Guerra, reducía drásticamente el número y el sueldo del clero castrense. Finalmente, el decreto dado por Romanones el 12 de abril exigiendo el título de doctor o licenciado a todos los religiosos incluidos en algún tribunal de examen levantaría una gran polvareda polémica, debido a los vitales intereses que lesionaba. Da una inexacta y tendenciosa noticia de esta legisla-

una gran tensión que algunas voces apocalípticas profetizaban que conduciría a un nuevo duelo fratricida, se celebraron elecciones parlamentarias (mayo de 1901), en las que las campañas preparatorias giraron, con casi exclusividad, en torno al tema religioso. Aunque pertrechado en una fuerte mayoría en las nuevas Cortes, Sagasta no mostró interés alguno en llevar más adelante su anticlericalismo y sólo la presión de algunos grupos parlamentarios y de cierto sector de la prensa le obligaron a plantear en las cámaras la cuestión del estatuto jurídico de las órdenes y congregaciones religiosas, cuyos efectivos se engrosaban espectacularmente debido a la gran afluencia a tierras españolas de nutridos contingentes de clérigos y monjas franceses expulsados de su país por el ministro de Waldeck-Rousseau<sup>57</sup>.

En tanto que los diputados conservadores defendían la tesis de la legalidad de las múltiples ordenes e institutos religiosos establecidos en el territorio nacional por acomodarse su existencia al famoso y controvertido artículo 29 del Concordato de Bravo Murillo<sup>58</sup>, sus adversarios mantenían su inclusión dentro de la ley de Asociaciones de 1887. Estas posiciones antitéticas (pese a que la argumentación de los dipu-

ción A. MONTERO, *Historia de la persecución religiosa en España. 1936-1939*. Madrid, 1961, 7. Acerca de uno de los puntos del famoso decreto, Romanones comentaría: "Establecí la diferencia de trato entre el alumno oficial y no oficial, a fin de fomentar la enseñanza de Estado, que arrastraba vida mísera e inútil competencia con la dada por las órdenes religiosas cuyos colegios estaban muy concurridos, mientras se hallaban desiertas las aulas de los Institutos". *Notas de una vida (1869-1901)*. Madrid, 1934, 195. En general para todo el problema, pp. 162-4.

57. Entre la ingente bibliografía sobre un tema que aún no ha logrado traspasar por completo los estadios de la polémica, cabe destacar las obras de J. KAISER, *Les grands batailles du radicalisme des origines aux portes du pouvoir. 1820-1901*. París, 1962. Sobre el aspecto aquí aludido, cfr. principalmente 271 y ss., y la ponderada y exhaustiva biografía de P. SORLIN, *Waldek-Rousseau*, París, 1966, 423 y ss.

58. Su texto literal era el siguiente: "A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos de quienes puedan valerse los prelados para hacer misiones en los pueblos de sus diócesis, auxiliar a los párrocos, asistir a los enfermos y para otras obras de caridad y utilidad pública, el gobierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los Colegios de misiones para Ultramar, tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo previamente a los prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de S. Vicente de Pául, San Felipe Neri y otra Orden de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán al propio tiempo de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos". Según se habrá observado, el artículo no especifica a cargo de cuál potestad correrá la elección de la tercera orden, a cuyo establecimiento tampoco se fija un determinado plazo cronológico.



tados liberales mostró un espectro más ancho que la de los conservadores) suscitaron en el Parlamento un verdadero derroche de casuismo y habilidad dialéctica al paso que algunos oradores, particularmente Canalejas, plantearon la cuestión de las relaciones Iglesia-Estado sobre los ejes que habrían de encauzarlas tiempo adelante<sup>59</sup>. Tras producirse una tan inútil como resonante intervención de ciertos prelados senadores en protesta del giro estatalista que proyectaba dar, en su opinión, el gobierno Sagasta al tema en disputa, y escindido el partido liberal con el abandono por Canalejas del gabinete de coalición liberal-demócrata salido del reajuste ministerial de mediados de marzo de 1902 —en el que dejaba la cartera de Agricultura—. Por manifestarse contrario a la posición sagastina en el pleito religioso, la Santa Sede y el Estado español lograron un *modus vivendi* —tan extendido en las prácticas y usos jurídicos de la época—, por el que, hasta tanto se llegaba a una revisión del Concordato, se reconocería la legalidad de todas las asociaciones religiosas que se inscribieran en los gobiernos civiles, sin que las autoridades gubernativas pudieran negarle la inscripción. Como los acontecimientos posteriores demostrarían, la habilidad de Sagasta encontró así una ingeniosa, aunque inconsciente, solución a un problema que desazonaba sus últimos días.

A partir de este momento y hasta la fecha en que Canalejas sube al poder en 1910, la “cuestión religiosa” estuvo sujeta al pendularismo crónico de la vida parlamentaria española. Los repetidos intentos de Maura para hacer extensivos a todas las congregaciones los privilegios de las asociaciones religiosas reconocida en el Concordato no alcanzaron nunca buen puerto; mientras que en los períodos en que el país era dirigido por los liberales, el anticlericalismo reverdecía una y otra vez, llegando a trazar el gabinete del general López Domínguez en 1906 un programa de laicismo en el que se seguían dócilmente las directrices puestas en práctica por los políticos radicales en la nación francesa.

59. El Sr. D. José Andrés Gallego realizó bajo nuestra dirección en la Universidad de Navarra una tesis de licenciatura sobre “La política anticlerical del último gabinete Sagasta” que por la agudeza de sus análisis y la copiosidad de las fuentes merecería, sobradamente, los honores de la publicación. Particularmente destacan en dicho trabajo, el estudio de los aspectos canónicos del tema. El libro de J. TURIN, *La educación y la escuela en España de 1874 a 1902*, Madrid, 1967, ofrece una excelente visión de conjunto sólo desfigurada por la acusada tendenciosidad de algunos de sus abundantes juicios de valor, 103 y ss.

Mientras que el Pontífice y Merry del Val alentaban sin reservas la Solidaridad catalana y la adhesión a ella de los católicos del Principado con el objeto de crear dificultades a los gobernantes madrileños.

El 9 de febrero de 1910 D. José Canalejas y Méndez fue encargado por Alfonso XIII de formar un gabinete cuyas riendas detentaría brillante e inteligentemente hasta su trágica muerte en noviembre de 1912. Punto axial de su política era el problema religioso de cuya favorable solución sobre la base de la supremacía civil dependía en gran parte la duración y viabilidad de su ministerio. En la persecución de tal objetivo, Canalejas llevó las negociaciones con el Vaticano —reanudadas e interrumpidas a compás de los avatares de la política nacional desde comienzos de la centuria— a un punto muerto, ante la irreductible defensa realizada por Pío X y su secretario de Estado, el joven cardenal español Merry del Val, de la soberanía total de la Santa Sede en punto a materia disciplinaria. Poco después Canalejas decidía pasar de manera resuelta a la ofensiva por medio de un decreto (junio de 1910) en el que reconocía —o, más exacto, se aplicaba el artículo XI de la Constitución del Estado— a las religiones disidentes el derecho a exhibir externamente los emblemas y signos de su culto. Medida complementada con la publicación (24-XII-1910) de la famosa “ley del candado”, por la que se prohibía la residencia en el país de nuevas órdenes religiosas por espacio de dos años sin autorización del ministerio de Gracia y Justicia, que, expresada por real decreto, se publicaría forzosamente en la “Gaceta”. La denegación del permiso sería automática cuando más de un tercio de la orden o congregación en cuestión estuviera compuesta de extranjeros.

El triunfo del gobierno, como sabía y tal vez quiso el propio Canalejas —objeto de incalificables ataques desde las páginas de ciertas publicaciones católicas y en los mítines y manifestaciones organizadas como protesta a su política por algunos prelados y entidades confesionales—, fue más aparente que real, pues el número de institutos religiosos establecidos entonces en la nación era muy crecido (hasta el extremo de no faltar en él ninguna de las órdenes o congregaciones reconocidas por la Santa Sede) y bastaban para subvenir las necesidades docentes de los católicos... Una enmienda del senador barón del Sacro Lirio vino igualmente a quitar mordiente a la disposición, al admitirse por el gobierno que si en el transcurso de los dos próximos años no era aprobada otra ley de Asociaciones distinta a la que databa



de 30-VI-1887, la del "candado" quedaría anulada. Dada la inestabilidad de la vida parlamentaria española, podían abrigarse fundadas esperanzas de que con dicha solución todo quedase en aguas de borrajas.

Rotas las relaciones con Roma, la reacción de las masas católicas fue, según quedó indicado, unánime y clamorosa, organizándose en numerosas poblaciones tumultuosas manifestaciones de protesta contra la política del gobierno, respaldado en todo momento por el monarca<sup>60</sup>. Merced, sin embargo, a las dotes políticas de Canalejas y a los buenos oficios del obispo de Madrid, D. J. M. Salvador y Barrera —gran amigo del presidente del consejo de ministros— y de Cambó, la reanudación de las relaciones estaba a punto de materializarse en realidad tangible cuando una de esas muertes que preside con trágico ritmo la trayectoria de la España contemporánea segó una vida quemada en su servicio. En enero de 1913, el restablecimiento de dichas relaciones era un hecho, sobre la base de que en el plazo de dos años todo nuevo establecimiento debería hacerse previa solicitud de permiso de la Santa Sede en Madrid. Desde entonces y hasta 1931, los principales puntos de fricción entre la Iglesia y el Estado españoles se producirían con monacorde reiteración en el terreno de la enseñanza. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, como compensación, en parte, del gran triunfo conseguido por ésta de suprimir en Cataluña la lengua vernácula

60. Un cuadro, en ocasiones superficial y arbitrario, aunque agudo en otras, acerca de toda la batalla diplomática entre la Santa Sede y el Estado español en torno a la "ley del candado" en J. M. JAVIERRE, *Merry del Val*. Barcelona, 1965, 403-27. Acertadamente Javierre impugna algunos extremos de la apresurada versión ofrecida por E. AUNOS PÉREZ: sobre el alcance y significado de la famosa ley: *Itinerario histórico de la España contemporánea (1808-1936)*. Barcelona, 1940, 304-19. Acerca de las campañas anticanalejistas, J. Pabón ha escrito: "Hoy podemos sonreír al recuerdo de la campaña contra Canalejas, considerado como un típico y sectario anticatólico; y comprobar que, en la ruidosa polémica, sus discursos tienen una sincera unción religiosa; y pensar que en la inmensa protesta suscitada y en el clamor de sus manifestaciones, tuvo un religioso respeto para todas ellas". *Cambó. 1876-1918*. Barcelona, I, 380. Y, por su parte, un reciente estudioso del reinado alfonso, Carlos Seco, afirma taxativamente: "Hoy, en 1969, en pleno despliegue y vigencia de las doctrinas del Concilio Vaticano II, hallamos toda la orientación canalejista mucho más acorde con la Iglesia renovada que las histéricas reacciones del catolicismo de cruzada alzado en 1912 contra un político tan sinceramente creyente que había obtenido del Pontífice el privilegio de tener capilla privada en su propio domicilio". *Alfonso XIII y la crisis de la Restauración*. Barcelona, 1969, 89.



la en la catequesis cristiana<sup>61</sup>, estuvieron a punto de coronarse los esfuerzos desplegados en pro de algunas reivindicaciones eclesiásticas en orden a la docencia, al prometer el gobierno el reconocimiento oficial de los centros de Enseñanza superior de Deusto y El Escorial<sup>62</sup>. Por esto es ya otro capítulo de nuestro más reciente pasado.

JOSÉ MANUEL CUENCA TORIBIO

61. Aporta, con cierta unilateralidad, numerosos datos sobre la cuestión R. MUNTANYOLA, *Vidal y Barraquer, Cardenal de la Pau*. Barcelona, 1970, 253 y ss. y passim. pero, sobre todo, pp. 793-806.

62. Alude al importante tema R. LA CIERVA, *Historia de la Guerra Civil española*. Madrid, I, 1969, 115.